# La clemencia real durante el temprano virreinato del Nuevo Reino de Granada

## Preámbulo[[1]](#footnote-1)

*Imperium*, según dijo el abogado de Leipzig Johann Lüder Albrecht, *est iubendi potestas*, el imperio es la potestad de dar órdenes y el *mero imperio* comprende la *gladii potestas*, es decir, el poder de la espada, concretamente el poder aplicar la pena capital. En síntesis, “Merum imperium est beneficio et gladio tradito data potestas ut facinorosi homines etiam ultimo supplicio animadverti possint”[[2]](#footnote-2). Con la misma lógica, la facultad de usar la espada como potestad soberana viene acompañada de la potestad para denegar su uso. Pero esta capacidad simbólicamente entregada por Dios al monarca y luego por el pueblo a sus gobernantes no se detenía allí, en general cualquier pena podía ser perdonada por el soberano, tanto así que en teoría podía llegar el caso de no aplicarse pena alguna y viceversa, podía ser tanto el rigor que nunca encontrara moderación la condena. Por eso es extraño encontrar al perdón como un acto de donación absoluta, por lo general está acompañado de la prudencia, la recompensa, incluso la conveniencia.

Esta es también una historia de la sacralización del perdón y la secularización del indulto, del confinamiento de la clemencia al plano moral, teológico, histórico y literario; entre tanto se otorga al indulto un sentido “monosémico” con pretensiones técnico-científicas. Pero no es esta una novedad del siglo XVIII, el reparto del perdón para la iglesia y el rigor para el imperio era un aspecto que estaba definido desde por lo menos el siglo quinto de nuestra era. Al imperio le correspondía el poder de la espada para ejercer la violencia y de hecho el perdón era percibido como sinónimo de debilidad del poder político, un defecto del soberano[[3]](#footnote-3). La división que tratamos en este trabajo no es de separación del fuero imperial y el eclesiástico con un reparto respectivo del rigor y el perdón, sino la concepción racionalista del castigo y una percepción nociva del perdón, una manifestación del sistema irracional heredado de la edad media que era síntoma de una legislación imperfecta, es por ello que no se trata de que Dios y la iglesia hayan sido excluidos de la legislación secular, sino que fue rel. Afortunadamente esta es un fenómeno explícito de la política borbónica que ha quedado plasmado con cierta claridad en las acciones que pretendían impedir que los delincuentes encontraran refugio en sagrado y con esto se alejaran de la espada justiciera del rey, así como en las actas de los colegios constituyentes de Cundinamarca y Antioquia, que afortunadamente se conservan, las cuales son una fuente particular para observar esta idea de una separación entre el pecado y el crimen en la etapa de experimentación constitucional neogranadina[[4]](#footnote-4).

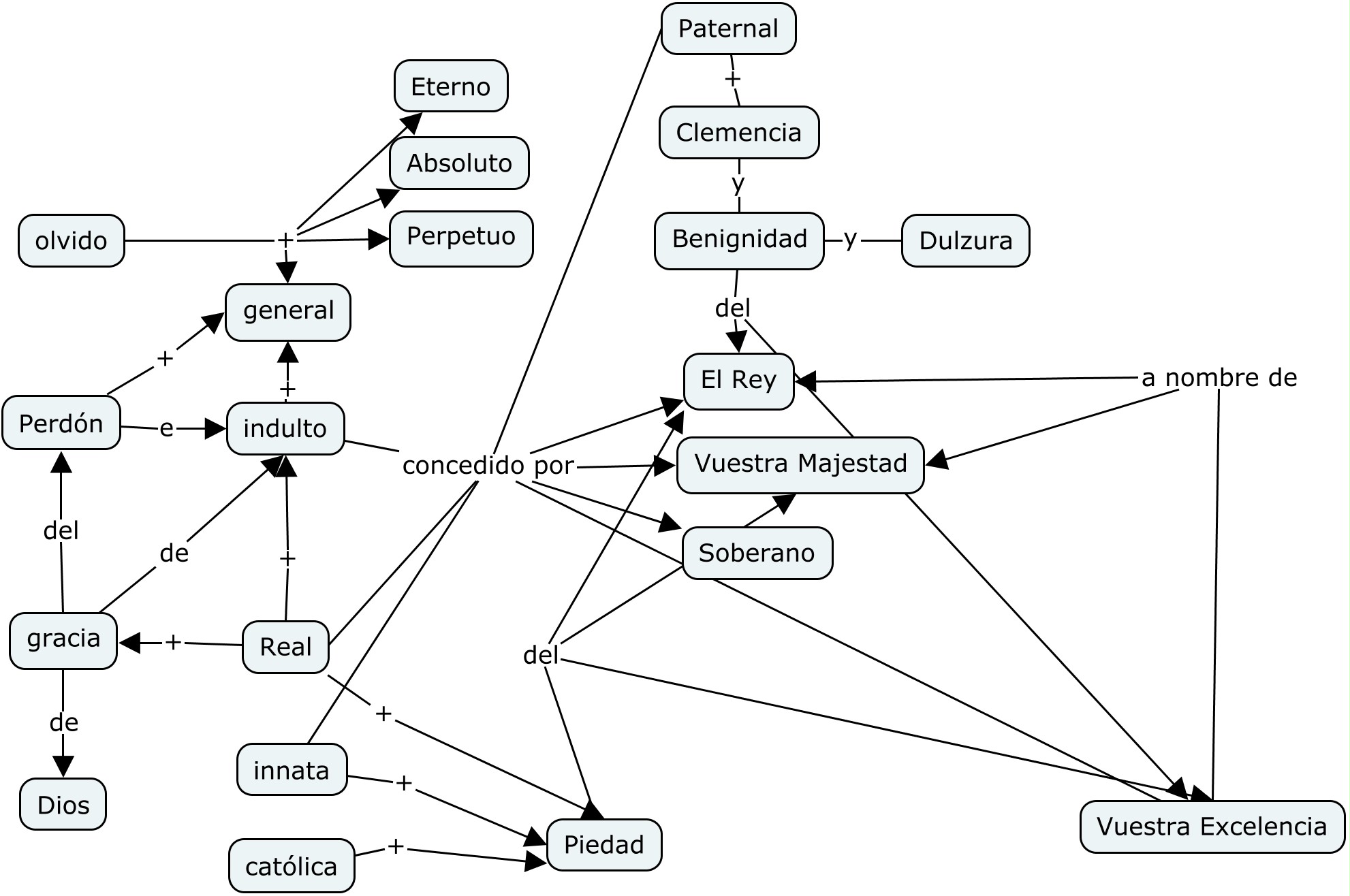
Los jueces inanimados son otra muestra de esta pretensión racionalista. La idea que un jurado podría tener la potestad de juzgar ciegamente, de tal manera que los jueces sólo tendrían la función de pronunciar las palabras de la ley, por lo cual, según Montesquieu en el espíritu de las leyes, los jueces deberían ser “des etres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur.” Si el monarca era el juez del imperio cuyo poder le permitía castigar bajo su arbitrio, siguiendo la sabiduría heredada por sus antecesores, Montesquieu elimina dicha posibilidad, ya no hay sentido de manipular la balanza de la justicia porque la ley sería siempre equitativa si se ejercía entre iguales sin la mediación del ánimo ni la voluntad, mediante un grupo aleatorio de personas que no tendrían ningún interés particular en definir la suerte del acusado basándose en otra motivación que las evidencias[[5]](#footnote-5). No es el interés de este trabajo el validar o refutar la validez de la idea de Montesquieu, sino resaltar el ideario de avanzada para los contemporáneos y para aquellos que apostaron por un sistema republicano constitucionalista. La justicia de las leyes se contrapone al gobierno de los jueces como una estrategia de modernización del sistema político, de brindar garantías y libertades a los ciudadanos que a su vez redundarían en el camino hacia el progreso material[[6]](#footnote-6). En la época del constitucionalismo estas ideas imbricaban un fuerte romanticismo, una percepción utópica de la construcción de un sistema perfecto del cual la constitución sería su primera piedra. Al finalizar las guerras y comenzar la construcción de las instituciones buena parte de este sentimiento había pasado y se miraba desde el plano heroico, las leyes en este orden estaban encaminadas a cumplir finalidades prácticas y en todo caso la marcha bolivariana por la conquista de las provincias del sur haría que la ley, si bien entendida con un ideal de perfectibilidad, estaba supeditada a las decisiones magnánimas del Libertador. La oposición a Bolívar en buena medida tendría que ver con este sentido monárquico del dictador que finalmente se arrogaba el poder de gobernar y juzgar. Tuvo la facultad de ajusticiar a Padilla y de perdonar a Santander teniendo como único fundamento su arbitrio, por lo que no es tan descabellado considerar que replicaba de alguna manera el principio del *mixto y mero imperio* del príncipe del antiguo régimen. Tal vez por esta razón es posible entender que al derrocarse el bolivarianismo (dimisión y muerte de Bolívar, fragmentación de la república de Colombia, rebelión de Urdaneta) el interés de los santanderistas y del mismo Santander haya sido retomar el proceso de construcción técnica de la ley como fundamento del gobierno. Rápidamente se da el paso hacia las recopilaciones y el primer código penal neogranadino con serios planes de elaborar los códigos civiles y de comercio, en este contexto el presidente pierde cualquier potestad del uso de la clemencia, la cual enuncia expresamente en el rechazo de los perdones particulares y en la justificación de la “conveniencia pública” para la promulgación de indultos generales a los rebeldes, insurrectos, infidentes y opositores.

Si el estudio del perdón como idea jurídico-política es arriesgado, el análisis histórico del campo semántico de la clemencia implica un reto aún mayor que sin duda no puede ser tomado a la ligera. Se comprende que la historia conceptual del perdón no es el objetivo central de este trabajo, pero consideramos que es necesario abordarlo de la manera más precisa posible de acuerdo con los métodos de la semántica y el modelo de la historia conceptual con el propósito de representar los espacios de experiencia de los participantes de las peticiones y concesiones de perdón e indulto. Para evitar un salto a la metafísica del concepto se intenta atar el análisis a las manifestaciones textuales presentes en documentos de diverso tipo, como los expedientes judiciales, la legislación, la doctrina, las consultas y comunicaciones entre oficiales del imperio.

Gracias a la revisión de estos documentos, que representan acciones “tangibles” del gobierno de la justicia, del ejercicio del poder y de las facultades graciosas “delegadas” por la soberanía, es posible estudiar la correlación clemencia-rigor desde las acciones de diferentes participantes del teatro social del mundo hispánico y nacional neogranadino. El interés consiste en identificar las decisiones de aquellos facultados para usar el rigor y la clemencia en determinados casos, ajustados a la prudencia, la conveniencia, la liberalidad o la conveniencia pública. En este sentido, los conceptos adquieren un valor práctico que puede ser puramente prosaico, como el no castigar una rebelión por la incapacidad para reprimirla, pero el hecho de no castigarla implica que existe un orden simbólico que permite que una acción práctica se sustente por medio de conceptos que no están anclados a la ley. Es de advertir que esta es una historia del perdón que unos hombres conceden a otros, por eso no es sólo una historia de la idea de clemencia, es una historia de relaciones que incluyen dentro de la magnanimidad a ciertos individuos y excluye a tantos otros, sea por sus crímenes, por su calidad, por sus méritos, por conveniencia o agradecimiento. El interés del esquema jurídico estatal-nacional pretende incluir y excluir a todos por igual, denegar los indultos particulares y conceder indultos parciales por causas específicas cada vez más limitadas al campo de la insurrección y la conmutación de la pena de muerte. Este proceso seguiría hasta el punto de que la soberanía prefirió entregar la espada, abolir la pena de muerte, limitando el indulto a los delitos políticos por graves motivos de conveniencia pública.

La primera hipótesis que ataca este proyecto considera que la categoría indulto, como tantos otros conceptos jurídicos que migran al marco normativo constitucional del estado-nación, pierden su riqueza semántica en pro de la exactitud taxonómica. Esto es, en el orden normativo de la monarquía hispánica un término como indulto puede considerarse hipónimo de clemencia y estar en equivalencia semántica con el perdón y el olvido, incluso con la restitución, la indulgencia y la conmutación, pero más con la piedad, la benignidad y la magnificencia. Para este ejercicio realicé un gráfico (Gráfica 1) que ilustra la red semántica del perdón sustentado en el volumen actual de texto recolectado en mi pesquisa documental que comprende concesiones y peticiones de perdón general y particular en el término del virreinato del Nuevo Reino de Granada desde 1739 hasta 1821, así como informes, consultas y comunicaciones al consejo de Indias y por la vía reservada[[7]](#footnote-7). Es evidente que la centralidad de toda la red se encuentra en la majestad y soberanía del rey quien concede el indulto y perdón general, que puede estar acompañado por el olvido eterno, absoluto y perpetuo, movido por su real gracia, paternal clemencia, benignidad y dulzura; o por innata y católica piedad. El virrey, en nuestro caso, tendría las mismas motivaciones del príncipe para otorgar el perdón pero mediado por hacerlo “a nombre del” monarca. Esta red, sin embargo, adquiere sentido y valor en el uso particular del perdón, durante la resolución de rebeliones, insurrecciones, infidencias o en la concesión o rechazo a la impetración particular, con lo cual sería posible realizar una lectura más ajustada a la lógica de significados de las peticiones y ofertas de indulto en cada evento determinado.

Gráfica . Representación gráfica de la red semántica del perdón real



Para el proyecto constitucional existe un interés legislativo para evitar esta “confusión” y dar a entender por indulto sólo lo que por ley está definido como tal. La cuestión fundamental es que al ser hipónimo de clemencia el perdón no se puede entender por fuera de la red semántica que le otorga sentido. Para decirlo de una manera más concreta, el significado de los conceptos jurídicos se da por su uso e intención mas no por su significado intrínseco y una lectura de la tratadística de los siglos XVI y XVII muestra esta particularidad cuando antes que buscar definiciones se quiere mostrar cuándo se usa de tal o cual facultad, potestad o gracia; por quiénes se ha usado y qué enseña la historia acerca de los usos adecuados e impropios, no del término, sino de las acciones que estos términos expresan.

Sintéticamente, si la hipótesis planteada en este proyecto es válida, la mutación de la clemencia real en indulto constitucional desligó el concepto “perdón” de la sinonimia que éste tenía con términos que se enmarcarán dentro del fuero moral, eclesiástico, histórico y literario, de esta manera, el indulto se reposiciona como un concepto meramente jurídico-político que no depende de la voluntad del soberano. De un modo más general, planteo que con el análisis de la mutación de la clemencia real en indulto constitucional es posible entrever un fenómeno más complejo de “transición” entre la justicia castellana y el derecho nacional contemporáneo que va más allá de la permanencia o transformación de la ley, es decir, que cada “manifestación” jurídica se trastornó gradualmente y de diferente manera pero con una línea evolutiva clara: la construcción de una taxonomía única, universal, positiva e infalible de los conceptos jurídicos representados en modo de ley y expresados en términos de su infalibilidad. Las constituciones no requirieron la construcción inmediata de los códigos pero sí determinaron un modelo a seguir al pretender la separación de los poderes y someter el ejercicio de la justicia al seguimiento de las leyes; como dirían los constituyentes de Antioquia en 1812, “para que manden la leyes, y no los hombres”[[8]](#footnote-8).

Una de las preguntas centrales de este trabajo consiste en descubrir a través de la mutación de la gracia del perdón puede ser evidencia de la “deshumanización” de la justicia. Que la ley sea independiente del juez y por ende la eliminación de su arbitrio es fundamental en la mutación del orden normativo al poder judicial y puede observarse reflejado en la transformación al indulto constitucional. Bien lo diría el presidente de Colombia ante los clamores de una madre que imploraba la libertad de su hijo, a pesar de los sentimientos de compasión que generaban los padecimientos del reo “se encuentra en incapacidad de obrar para ello conforme á los impulsos de la naturaleza, i tiene que subordinar el sentimiento á la voz del deber legal”[[9]](#footnote-9). En esta sencilla frase se encuentra inserto un proceso que redefinió el sistema normativo en Colombia y de cierta manera puede considerarse como una mímesis de otras experiencias legislativas como la francesa, la inglesa y la estadounidense[[10]](#footnote-10). Este sentido de “deshumanización” permite que esta disertación trascienda de la descripción del paso de la polisemia a la monosemia normativa (fundamentación del lenguaje científico-técnico) y se comprenda como un proceso histórico de mutación de una relación entre el poder soberano y los sujetos a dicha soberanía, en nuestro caso, de aquellos que quebrantaron el esquema normativo y se hicieron o podrían hacerse acreedores del castigo. La complejidad aquí es mayor, pues ya no se cuenta solamente como una transformación en la enunciación sino en el mismo entrelazamiento figuracional de un orden social monárquico o estatal-constitucional[[11]](#footnote-11). Como afirma Koselleck, el concepto refleja la experiencia histórica y por ende el sentido de la gracia del perdón puede ser interpretado por el concepto pero no puede separarse de la experiencia cuyas huellas son visibles en los rastros dejados tras los procesos de administración y justicia.

## La clemencia del virrey durante la temprana era borbónica

Para este primer capítulo se aborda el perdón “virreinal” entendido como aquellas particularidades de la institución de la clemencia real que se presentaron con la creación del título de virrey del Nuevo Reino de Granada, en el entendido que su presencia implicó una nueva autoridad dentro de la posibilidad de otorgar perdones generales y particulares sin que por ello los gobernadores perdieran su facultad, aunque sí la vieron limitada en ciertos puntos. La hipótesis particular que guía este apartado comprende que durante este periodo de tempranas (en cierta manera tímidas) reformas, la clemencia real no tuvo transformaciones significativas con excepción de algunas limitaciones particulares asociadas al control del comercio ilícito. Tampoco fue el perdón el interés particular del gobierno virreinal, que por parte de Eslava trató de incentivar una política fuerte contra las redes que permitían el comercio ilícito protegiendo a oficiales que podían considerarse problemáticos como José Pestaña. Tampoco fue esta una época en la que el perdón tuviese que jugar un papel importante ya que el interés de la corona estaba volcado en buena medida hacia la protección de los antemurales caribeños de Tierra Firme tanto del comercio ilícito como de la permanente amenaza inglesa y holandesa[[12]](#footnote-12). Para el centro del Nuevo Reino la situación aparentaba una relativa calma que no parecía amenazar el dominio de la oficialidad real sobre un territorio que aún tenía problemas de poblamiento y cuyo mayor problema seguía siendo la incapacidad para controlar la explotación de la Corona sobre la explotación minera y la eficiencia en la recolección de tributos a la real hacienda.

La reinstauración del cargo de virrey de Santa Fe en 1739 hizo parte de un grupo de reformas que contó con el liderazgo del ministro José Patiño. Si bien el encargo principal de Eslava consistió en hacer frente a la amenaza inglesa, que se concretaría tras la denominada Guerra del Asiento o de la oreja de Jenkins, también se buscaba con este puesto controlar las redes del contrabando que se extendían desde Cartagena hasta Santa Fe, la conquista de los indios rebeldes, la explotación de los minerales y la mejora de la Real Hacienda. Siguiendo a Francisco Eissa-Barroso, la primera creación del virreinato de Santafé en 1717 "fue una respuesta a los problemas que las autoridades centrales de la monarquía percibían en la Nueva Granada, en tanto que los tiempos y forma en que se implementó ésta fueron consecuencia directa de la lucha entre quienes pretendían que la Corona ejerciera directamente el gobierno de sus territorios y el Consejo de Indias"[[13]](#footnote-13), lo que se ha interpretado como una disputa entre el grupo reformista liderado por el cardenal Giulio Alberoni y el partido conservador en la corte de Madrid. Esta primera creación fracasa al mismo tiempo que Alberoni cae en desgracia. El primer virrey, Jorge de Villalonga, tuvo que enfrentar la resistencia de las élites del Nuevo Reino cuyas denuncias, algunas infundadas, sobre participación del nuevo oficial en el comercio ilícito aunado a su liberalidad del gasto, hallaron eco en el Consejo de Indias y en la Corte del Rey, tal como consta en la cédula de supresión del empleo de virrey que manifestaba “el poco o ningún remedio que se ha reconocido con la creación de Virrey, sin aumento de caudales, ni haberse podido evitar los fraudes y algunos desórdenes que se han ocasionado”[[14]](#footnote-14).

La reinstauración del virreinato en 1739, según Ainara Vázquez y Francisco Eissa-Barroso, obedeció al inmediato interés por fortalecer el caribe, especialmente Cartagena y Portobelo, ante el comienzo de la Guerra de la Oreja de Jenkins (1739-1748). El empleo fue dado a Sebastián de Eslava Lasaga quien se estableció en Cartagena hasta finalizar su gobierno una década más tarde, prácticamente todo el tiempo que duró la guerra con Inglaterra. Aunque Eslava ganaría cierto respeto por el triunfo en la campaña contra la armada inglesa comandada por Vernon y el heroico relato de un triunfo cuando todo parecía perdido, los enfrentamientos contra Blas de Lezo, la animadversión de ciertos personajes influyentes cercanos a la Secretaría de Estado, su deseo de escalar hacia el virreinato del Perú y los problemas internos generados con las familias y oficiales residentes en la provincia de Cartagena, construyeron un escenario poco lisonjero para el segundo virrey del Nuevo Reino[[15]](#footnote-15). A lo anterior se suma la dificultad que implicaba para este oficial el encargarse de un territorio tan dilatado y en buena medida inexplorado, lo que permitía una importante autonomía de las autoridades y jueces provinciales tanto así que para algunas provincias y particularmente para el ámbito de influencia santafereño los efectos del nuevo virrey no fueron tan significativos, por lo menos no en el mismo sentido que el impacto que tuvo la previa corte del virrey Villalonga en la élite del Nuevo Reino[[16]](#footnote-16).

Los casos de Pizarro y Solís parecen haber representado una simbiosis interesante con las redes familiares y las autoridades santafereñas. Para el caso de Solís, Margarita Restrepo ha dicho que destacó “su carácter pacífico y sereno”, a pesar de algunos conflictos menores que se generaron en las gobernaciones de Cartagena y Chocó este virrey desarrolló una política moderada con resultados significativos en el ramo de hacienda y en la pacificación de los indígenas de las provincias de Santa Marta y Popayán. Tampoco parece que hubiese sido un interés de este virrey adelantar reformas en la tributación o en la secularización de doctrinas, manteniendo una política de extrema prudencia. Restrepo sintetiza el gobierno de Solís diciendo “fue un gobierno tranquilo; a la ausencia de agresiones externas se sumó la de conflictos en el interior. […] podemos concluir diciendo que Solís fue un buen virrey: no tuvo graves problemas que resolver, pero tampoco los creó, y los que debió afrontar lo hizo con serenidad y eficacia.[[17]](#footnote-17)”

Dentro del incipiente estudio de los gobiernos virreinales del Nuevo Reino el de José Alfonso Pizarro hasta ahora no ha llamado la atención a la historiografía, sin embargo no parece que su gobierno haya tenido un tono muy diferente al de su sucesor Solís. Anthony McFarlane, por ejemplo, señala que Pizarro utilizó una política selectiva respecto a las reales órdenes que cumplía y aquellas que omitía bajo la justificación de que las condiciones del reino no permitían su implementación o sencillamente no las había recibido[[18]](#footnote-18). Lo anterior le habría evitado conflictos en su corto gobierno (arriba a Santa Fe en 1750 y es reemplazado por Solís al finalizar el año de 1753), aunque Henao y Arrubla en su vituperada *Historia de Colombia* mencionaron ciertos motines causados por el proyecto de implementar la renta de aguardientes solventados gracias a la “prudencia y habilidad” del comisionado regio José Antonio de Plaza[[19]](#footnote-19). La carrera de Pizarro no estaba asociada al gobierno sino a la guerra, fue escogido para reemplazar a Eslava por esta razón, pero su paso por el Nuevo Reino parece haber sido simplemente un escalón en su carrera tras comandar la flota que reforzó las costas del Perú en 1740[[20]](#footnote-20) y las de Buenos Aires en 1743, consiguiendo por sus acciones que se le otorgara el título de Marqués del Villar. Lastimosamente, en Santa Fe enfermó de un tumor en la pierna y tras ser reemplazado no alcanzó siquiera a llegar con vida a la península[[21]](#footnote-21).

Parece claro que los conflictos que enfrentó Eslava se debieron más a su temperamento fuerte que a una ejecución de las políticas borbónicas. Si algo es evidente durante la primera mitad del siglo XVIII es que las primeras etapas de reformas durante los reinados de Felipe V y Fernando VI tuvieron un sentido casi experimental en Indias, por lo cual era más fácil recular y evitar con ello el desarrollo de conflictos de gran nivel. Aunado a lo anterior el sentido de amenaza permanente como consecuencia de los deshonrosos tratados de Utrecht y Rastatt. Esta posición de debilidad ante las potencias inglesas y holandesas predominaba la protección y el fortalecimiento de las llaves del Caribe en detrimento de la implementación de las reformas pretendidas desde las secretarías en España[[22]](#footnote-22). Sin embargo, incluso este fortalecimiento tuvo que esperar hasta la década de 1760 cuando se inició el más importante esfuerzo de fortalecimiento militar del Caribe, iniciando por la reorganización del ejército del virreinato del Nuevo Reino de Granada[[23]](#footnote-23). La paradoja española consistió en la necesidad de fortalecer las llaves del Caribe ante la amenaza inglesa y a la vez la casi bancarrota colonial después de la Guerra de Sucesión, por lo menos así queda plasmado en la reducción del gasto destinado a defensa por parte del virreinato del Perú que incluyó no sólo a las fortificaciones sino también a los sueldos de los militares[[24]](#footnote-24). No es coincidencia en este sentido los mayores levantamientos de la época fuesen protagonizados por la tropa de las plazas defensivas de América.

### La facultad de perdonar y castigar del virrey

Previo a su embarco a Cartagena, Sebastián de Eslava recibió las instrucciones y cédulas que facultaban sus funciones como virrey de Santa Fe. Si bien su misión principal consistía en fortalecer las costas entre Portobelo y Caracas previniendo el ataque de las tropas inglesas, también se encontraba dentro de sus instrucciones el fomentar la extracción de minerales y recursos naturales que pudiesen ser aprovechados comercialmente, la pacificación de los indígenas rebeldes que dominaban buena parte del territorio que se concebía como de su jurisdicción, así como el exterminio del comercio ilícito con los reinos extranjeros, en particular contra los holandeses e ingleses. Es evidente que este proyecto estaba más cercano a las pretensiones de la Corona que a un proyecto en realidad realizable por un oficial. En principio, como lo han mostrado Ainara Vázquez y Francisco Eissa-Barroso[[25]](#footnote-25), este nuevo oficial tuvo que entrar a jugar con una red de poderes que tenía estrechos lazos entre el gobierno, la justicia y el comercio ilícito, un aparente estado anárquico difícil de conocer más allá de las fronteras jurisdiccionales de las ciudades, una extensa relación de cimarronaje y extracción ilícita de minerales, entre otros tantos “vicios” de los cuales se recibían permanentes informes a través de la vía del Consejo de Indias.

Las instrucciones dadas a Eslava planteaban explícitamente el uso que debía hacer de la clemencia y el rigor, con predominio del primero sobre el segundo. En el capítulo 21 de las instrucciones el rey le indicaba a Eslava que a pesar de su confianza en el buen vasallaje de los españoles que habitaban esos reinos esperaba que en caso de producirse una rebelión o escándalo predominara en el uso de “suaves y buenos medios” y sólo en caso de que estos no fuesen suficientes utilizara la estrategia que le pareciera más conveniente según su prudencia, con el fin de conseguir que el sosiego de los escándalos y que sus causantes fueran castigados[[26]](#footnote-26). Como tal esta instrucción constituía una pretensión de lo que debía ser un buen príncipe, modelo al cual debía remitirse el *alter nos* del monarca, partiendo de un ejercicio benevolente del poder que siempre presentaba a su ofensor la rama de olivo sin soltar nunca la espada. Esta doctrina parece haberse aplicado en la mayoría de instrucciones que se enviaban a los oficiales encargados de la pacificación de las provincias, aunque en general se prefería el uso de la espada para aplacar y castigar a los rebeldes la realidad del ejercicio político-militar en las provincias como las del Nuevo Reino de Granada parece haber obligado a los oficiales al uso del perdón, más que por un acto de benevolencia o ajuste a la doctrina, por la incapacidad de utilizar el rigor o de evitar que su uso conllevara un desorden generalizado. Por esta razón es que el modelo utilizado para el sofocamiento de las rebeliones era en general una combinación de fuerza y clemencia con un tratamiento diferenciado a los cabecillas para quienes en general la norma debía ser el condigno castigo[[27]](#footnote-27). Este modelo tradicional sería expresado en forma de regla con la expedición de la pragmática sanción de 17 de abril de 1774 que prescribió la forma de proceder contra los promotores de revueltas al decir que “Todos los bulliciosos, que obedecieren, retirandose pacificamente al punto que se publique el Vando, quedarán indultados, á excepcion solamente de los que resultaren autores del bullicio, ó conmocion popular, pues en quanto á éstos, no ha de tener lugar indulto alguno.[[28]](#footnote-28)”

La corta instrucción citada muestra otro aspecto clave dentro de lo que se considera el perdón del virrey de Indias[[29]](#footnote-29): su limitación a los casos de rebelión. Solórzano Pereira fue sin duda uno de los que con mayor autoridad doctrinal expresó esta limitación al tratar las facultades de los virreyes: “Teniendo entendido, que no aveis de perdonar delitos, que no fueren de rebelión, ó dependientes dellos. Y que de este poder no aveis de usar, sino fuere en casos de guerra, y alteraciones”[[30]](#footnote-30). Contrasta sin embargo con la cédula de Felipe III de 1614, incluida en la *Recopilación de leyes de Indias*, en la cual otorgaba potestad absoluta a los virreyes indianos para perdonar delitos[[31]](#footnote-31), ante lo cual Solórzano aclaraba que a pesar de esta facultad original el conjunto de disposiciones posteriores limitaba dicha facultad a la regalía del monarca:

Y esta disposicion, y resolucion es muy conforme á las reglas de Derecho, que nos enseñan, que el hazer semejantes perdones, y remissiones de delitos, ó estorvar que no se executen las sentencias en ellos dada, es de los que llamas Regalias, y solamente reservado á los Reyes, y Príncipes absolutos, en señal de su Suprema jurisdicción, de donde en nuestros propios términos concluyen Bosio, Cacherano, Avendaño, y otros, que no los Vicarios del imperio, ni los oidores, ni Consejeros por Supremos que sean las pueden hazer, de que tambien tenemos leyes de Partida i Recopiladas[[32]](#footnote-32).

Si se sigue esta lógica no habría contradicción entre las dos cédulas que se dieron a Eslava para el poder usar del perdón. En la primera se le otorga facultad absoluta para el uso de la clemencia: “por la confianza que de vuestra persona tengo, os doy facultad para que en mi nombre podais perdonar a todas y qualesquiera personas que en aquellas partes residieren quales quiera delitos y excesos que hubieren cometido y hecho contra mi R[ea]l Corona.[[33]](#footnote-33)” En acuerdo con la cédula de Felipe III ya citada la concesión de la facultad estaba ceñida únicamente a la sabiduría para actuar de la misma manera cómo el rey lo haría (algo que implicaría que en ciertas ocasiones el monarca recriminara al virrey por haber perdonado a quiénes él no consideró prudente). Como quedó expreso en la cédula facultativa el virrey podría perdonar a nombre del rey, émulo de su magnificencia y benignidad (fórmula frecuente en las concesiones de perdón general), lo cual traía como consecuencia que a pesar de actuar dentro de su jurisdicción el perdón sería válido en la totalidad del dominio de la Monarquía:

[…] a las personas que asi por vos fueren perdonados, Yo por la presente les perdono de los delitos que los perdonareis aunque sean de calidad que conforme  derecho requiera que fueran espezificados y declarados en esta mi Provision, y mando a todas y qualesquier mis justicias asi de estos Reynos y señorios como de las dichas Provincias del nuevo Reyno de Granada, y de otras qualesquier partes de las Yndias, yslas, y tierra firme del Mar Oceano, que no procedan de oficio ni a pedimiento de Pr[ocurad]or Fiscal, ni de otra persona alguna contra los que asi vos hubiereis perdonado, ni contras sus vienes, quanto a lo Criminal reservando (como reservo) a las partes su derecho, en quanto a lo Civil interes y daño de ellas pues yo por la presente (como dicho es) les remito mi Justicia, y mando que no puedan ser presos y acusado, ni sus vienes tomados, ni embargados, ni se puedan hacer ni hagan procesos ni dar sentencias algunas contra ellos en los casos que así por vos fueren perdonados y si algunos procesos estubieren hechos ó comenzados por la presente los doy por ningunos y los cancelo y anulo como si no los hubieran hecho, y quiero de ellos y sus descendientes toda macula e infamia en que por ello hayan incurrido, y los restituyo en el estado en que estavan antes que cometiesen los dichos delitos para que en juicio ni fuera de el, no se les pida cosa alguna acerca de ellos[[34]](#footnote-34).

El perdón estaba otorgado de antemano por el Monarca a través de esta facultad, pero correspondía al virrey el uso prudente de esta regalía. En este orden de ideas, el virrey podía, en derecho, perdonar a cualquier vasallo sometido a su jurisdicción y restituirlo a nombre del monarca al estado anterior al delito. Tenemos entonces tres conceptos claves en el sentido del perdón que se brinda al virrey: la soberanía, *irusdictio* y *restitutio*, es decir, el ejercicio del poder político y de la restitución de la *aequitas*. Estos serán aspectos que serán tratados con más detenimiento en el siguiente apartado de este capítulo.

Ahora bien, dicha concesión en apariencia absoluta estaba rodeada de limitaciones: se otorga porque era necesario atraer a los delincuentes que se encontraban escondidos en lugares inaccesibles para los oficiales reales, por lo cual era imposible “proceder contra ellos, conforme a Justicia y condenarlos en pena de muerte y perdimento de vienes y en otras penas”, en el entendido que estos delincuentes cometieron sus actos por una simple acción de ignorancia mas en ningún caso tuvieron la voluntad para alejarse del servicio del rey y al contrario estarían dispuestos a retornar al dominio de la monarquía. También aclara que este poder se le otorgaba “para que si viereis que conviene para la pacificazion y quietud de las citadas Provincias de las ciudad de Santa Fee y nuevo Reyno de Granada, y demas que se agregan a la juris[dicci]on de este virreinato, perdonar á todas y qualesquiera personas particulares que hayan cometido delitos asi antes de la data de esta mi Provisión como despues de ella.” Tales elementos de conveniencia son los que están en acuerdo con lo planteado por Solórzano, ya que en ningún caso se pretende que esta gracia sea utilizada por fuera de los términos de la consecución de la paz del reino. Tanto es así que la segunda cédula simplemente lo deja expresado para evitar ambigüedades:

[…]os he dado facultad para que si viereis que combiene para la quietud de aquellas Provincias, perdonar a qualesquiera personas los delitos que huvieren cometido lo podais hacer[…]. Y respecto de que esta facultad se os da para lo que toca a la authoridad del cargo que os he conferido, y por la confianza que tengo de V[uest]ra persona, aunque entiendo que usareis de ella con la considerazion que se requiere, he resuelto advertiros que mi voluntad es que no useis de esta facultad si no fuere en casos de rebelión, y que combenga mucho a mi servissio y al sosiego y quietud de la tierra[[35]](#footnote-35).

Pero no sólo con ramas de olivo se consigue la paz de la tierra. Con el mismo principio de restaurar la tranquilidad de las provincias en la jurisdicción del virrey se le otorga la facultad de castigar, “porque como sabéis mediante la execucion de la Justicia se satisfacen las culpas y el temor del castigo, corrije los animos inquietos y de los malinclinados que perturban la quietud de las Republicas”[[36]](#footnote-36). En ese sentido se ordena al virrey que al momento de llegar al Nuevo Reino de Granada se informase acerca del estado de la administración de justicia y de los delitos que no se hubieran castigado para que aplicara el respectivo correctivo, no sólo en causas civiles y criminales de oficio y a pedimento de parte sino en general contra cualquier oficial y vasallo de cualquier “estado, condiccion, preheminencia y calidad”[[37]](#footnote-37).

En todo caso, como señaló Anthony McFarlane, a pesar del fortalecimiento de la autoridad de Santa Fe tras la creación del virreinato la política del gobierno de los virreyes Eslava, Pizarro, Solís y Mesía de la Cerda, no habría implicado una renovación respecto de la tendencia conciliadora del régimen de los Habsburgo. El interés máximo de estos virreyes habría estado a tono con conservar la paz de las provincias agregadas a su autoridad en detrimento de una aplicación efectiva de las reformas que se propusieron desde la casa borbónica[[38]](#footnote-38).

### Soberanía y jurisdicción en el perdón virreinal

Cuando se trata de la jurisdicción del virrey es posible entenderlo de una manera sintética siguiendo a Solórzano Pereira, personaje partícipe del gobierno de Lima en 1610 y miembro de los consejos de Castilla e Indias. En sus términos consiste básicamente en las cosas que los virreyes pueden hacer conforme a los títulos, poderes e instrucciones que le son dadas para esos cargos[[39]](#footnote-39). No se debería confundir su jurisdicción con la autoridad de este ministro puesto que esta última hace referencia a la posición jerárquica de su cargo en el entramado de gobiernos de la monarquía, en tanto la jurisdicción hace referencia al alcance del poder de su empleo[[40]](#footnote-40). Se tiende a relacionar la jurisdicción con la *iurisdictio*, esto es, la potestad de decir derecho en un proceso de establecimiento de normas y administración de justicia[[41]](#footnote-41). De una manera más precisa Pietro Costa lo tradujo para el ámbito del pensamiento jurídico medieval como el proceso de poder, desde la perspectiva del estructuralismo lingüístico de Saussure, es decir, una relación asimétrica entre el dominante y el dominado en el cual se ejerce la autoridad y esta misma se legitima en esta relación[[42]](#footnote-42). La complejidad de la *iurisdictio* radica en que es un término polisémico, como la mayoría de los heredados del orden jurídico medieval, que puede ser representado por otras palabras pero que de una manera sintética (y como tal imprecisa) precisa la idea de la justicia como conservadora del orden natural (*ordo*) en el que la estratificación de la misma comprende el sentido original e inamovible del mundo definido desde su creación[[43]](#footnote-43).

No pretendo en este trabajo discutir el concepto de *iurisdictio*[[44]](#footnote-44), pero sí comprender que existe una relación entre la facultad de perdonar y el orden jurisdiccional ya que tal potestad está atada al ejercicio mismo del poder y representa una expresión simbólica de la soberanía. Este aspecto es importante para comprender la cultura política en la cual el soberano ejerce su poder “declarando” derecho para mantener un orden jerárquico natural que en su mutación hacia la “modernidad” se desprende del principio histórico de un orden dado y se proyecta hacia un orden ideal progresivo de hombres iguales en derecho. No es por tanto extraño que el proyecto de “legalización” del ejercicio del perdón se encuentre vinculado con la secularización de la política y el derecho contemporáneo, aunque debe matizarse que eso no implica que el estado-nación simplemente elimine el fuero eclesiástico, sino que lo recoloca y define dentro de otra órbita de la soberanía estatal[[45]](#footnote-45).

Ahora bien, siguiendo con la lógica del orden jurídico jurisdiccional, la facultad de perdonar del virrey es una concesión jurisdiccional del príncipe[[46]](#footnote-46), pero dónde y cómo la puede ejercer comprende su jurisdicción particular. En principio el virrey puede perdonar de acuerdo con su autoridad y posición dentro de la jerarquía de la oficialidad monárquica. Solórzano llama la atención respecto al poder casi absoluto con el que cuentan los virreyes en sus provincias, figura que sería comparable a la de los prefectos pretorianos de los romanos siguiendo lo dictado por el *Digesto*, pero de manera más clara, en las provincias que se les encargaban “tienen i exercen el mesmo poder, mano, i jurisdicion que el Rey, que los nombra”, pero aclara que esta jurisdicción no era delegada sino ordinaria, por lo tanto no era posible, en ningún caso, que los virreyes indianos contaran con “suprema jurisdicion" ya que esta es incomunicable y es atribución natural y única del príncipe[[47]](#footnote-47). Simbólicamente, el virrey refleja al príncipe (hace presente con su persona la imagen del monarca) y se hace más necesario en tanto esté más alejado del rey, pero la dignidad de su oficio está vinculada necesariamente con la correspondencia de sus acciones con lo que se espera de aquel que le ordena[[48]](#footnote-48). Por ello las instrucciones no son letra muerta en ningún sentido, hacen parte fundamental de lo que se espera que el virrey, como persona meritoria, pueda cumplir en sus provincias. Así, si bien autoritariamente está situado en la cabeza del gobierno provincial[[49]](#footnote-49) no por ello cuenta con completo arbitrio ni mucho menos soberanía para ejercer su oficio[[50]](#footnote-50). Tanto más que la jurisdicción, en tanto progresa la tratadística del siglo XVIII se considerará más cercana a hacer lo prescrito por el derecho, entendido como ley, alejado del principio del arbitrio basado en la sabiduría del juez-gobernador, idea que se debatirá seriamente durante la experimentación constitucional temprana[[51]](#footnote-51).

No son pocas las ocasiones en que se asimile jurisdicción con territorio, en especial para inicios del siglo XIX. Por ejemplo, en su huida a la Habana, el contador de la Casa de la Moneda de Santa Fe, Diego Llorente, le escribe a su amigo Diego Frías, oidor de la audiencia de Puerto Príncipe, diciéndole que las tropas de Bolívar entraron en la jurisdicción de Santa Fe, asimilando ésta a una frontera territorial. Puede considerarse esta mención como una simple figura retórica de las que abundan en las comunicaciones de la época, pero siendo una comunicación entre empleado y oficial real habría un código compartido que evitaría la confusión[[52]](#footnote-52).

### La facultad para perdonar en su jurisdicción

En primer lugar, la clemencia del virrey no es tanto una potestad como la imitación de la piedad de Dios “el qual es piadoso, y no quiere la muerte del pecador, sino que viva, y se convierta”, como dejó dicho Castillo de Bobadilla. El Rey se equipara a Dios en la clemencia y como reflejo de ambos el corregidor debería imitar “la condición de clemencia de los Reyes de España”[[53]](#footnote-53). Desde la normativa de la monarquía no es claro quién es el encargado de perdonar en cada jurisdicción, toda vez que las normas recopiladas sólo tratan del virrey e incluso en el campo doctrinal esta regalía se asume como atributo regio reflejado en su *alter nos* por conveniencia más que por atribución de su cargo[[54]](#footnote-54). Esto no implica que el virrey fuese el único facultado para perdonar en el ámbito indiano, de hecho, junto a los virreyes eran los gobernadores quienes utilizaban esta regalía para enfrentar los conflictos de su jurisdicción, lo cual, nuevamente, no está dado por el mismo hecho de ser gobernador sino por las instrucciones y ordenanzas dadas a estos e incluidas en sus nombramientos o por cédulas particulares. Por ejemplo, para el caso cartagenero fue otorgada la potestad de perdonar a los delincuentes de ilícito comercio al gobernador Antonio de Salas (1729-1736) y a su sucesor Pedro Fidalgo (1736-1741)[[55]](#footnote-55), pero a ambos fue concedida por cédulas expresas que condicionaban su facultad y, como lo dejó claro el Consejo de Indias tras una consulta en septiembre de 1748, esta no podía ser considerada inherente al puesto (“perpetuada en los gobernadores de Cartagena”) y antes bien, después del nombramiento de Eslava el rey consideró que no era de su voluntad conceder nuevamente la facultad de perdonar a dichos gobernadores y en cambio dejaba como uso exclusivo de dicha regalía al cargo de virrey[[56]](#footnote-56).

Ahora bien, hay que aclarar que el rey retiró la facultad de perdonar delitos de ilícito comercio pero no lo hacía explícitamente con la capacidad de ofrecer perdones generales en caso de rebelión, toda vez que por la distancia la consulta al virrey sería contraproducente pues retrasaría la pacificación de los habitantes bajo su jurisdicción. Además, esta facultad de personar delincuentes habría sido utilizada consuetudinariamente por los gobernadores cartageneros. Por ejemplo, el gobernador José de Zúñiga y de la Cerda[[57]](#footnote-57) apeló al perdón general para resolver una revuelta instigada por los acaldes de Mompox en su contra. En este caso el gobernador estaba enfrentado con los oficiales vinculados a la jurisdicción de la audiencia de Santa Fe y consideró otorgar “perdón general a la plebe con tal de que en lo adelante no incurran en otro exceso igual, reservando el proceder contra los motores”, la cual era una fórmula generalmente utilizada en este tipo de revueltas. Sin embargo, los alcaldes rebeldes negaron la publicación (y con ello la oferta) pues consideraron que hacerlo era equivalente a aceptar la jurisdicción del gobernador por sobre la de la audiencia[[58]](#footnote-58). El gobernador Jerónimo Badillo también utilizó el perdón general para resolver una revuelta de negros cimarrones en el palenque de San Miguel, hoy conocido como San Basilio de Palenque, en 1717; y según María Cristina Navarrete la misma estrategia se había utilizado con otros cimarrones durante el siglo XVII[[59]](#footnote-59). También es posible entrever que la atribución de perdonar estaba asociada al cargo de virrey y de gobernador, como cuando explícitamente se dice a estos oficiales por cédula de 10 de diciembre de 1725 que en sus jurisdicciones no se indulten a los contrabandistas[[60]](#footnote-60).

Es claro que los gobernadores utilizaban la facultad de perdonar al igual que la de castigar en sus jurisdicciones pero Eslava consideró que tal regalía no podía ser utilizada por otro gobernador, al menos en asuntos de ilícito comercio. Al poco tiempo de llegar a Cartagena, según dijo el gobernador interino de Cartagena, teniente del rey Melchor de Navarrete, Sebastián de Eslava ordenó “retirar los honores que hacían á este oficial y que en los preveydos no se describiese la facultad que le está concedida para indultar delinquentes de Comercio ilícito”. La consulta y queja de este oficial al Consejo de Indias consistía en solicitar se le aclarase “si el usar del titulo de Juez para indultar delinquentes, menoscaba la facultad del Virrey ó si el fundar conocimiento en la citada causa, merece el arresto en que le puso, a fin de que se repare el daño padecido, con lo que se declarase y quede enseñada para en ádelante.[[61]](#footnote-61)” Buena parte de este retiro de la facultad y arresto del gobernador por su uso puede referirse más a un enfrentamiento personal entre ambos oficiales que a una meditada apreciación respecto de la jurisdicción y regalías de cada cargo. Entre las evidencias de este conflicto están la suspensión del empleo de teniente que ordenó Eslava en agosto de 1742 por haber, supuestamente, disimulado la carga de comercio ilícito por "la permision y authorisacion que dio a ciertas guias sueltas, para conducir caudales a ese Reino [Cartagena], sin comprehenderse sus partidas en los registros que se forman, contraviniendo á lo dispuesto por vuestras Reales Leyes". Al año siguiente se ordenó la restitución de Navarrete a su empleo por considerar que las guías se habían librado "con una total inadvertencia y no previniendo los perjuicios que podian seguirse"[[62]](#footnote-62). Navarrete logró a pesar de esto conseguir que se le revocase la suspensión[[63]](#footnote-63) y además se le nombrase como gobernador en La Florida, un cargo con mayor prestigio que el de gobernador de Cartagena[[64]](#footnote-64).

También hay que remarcar que la idea de limitar el indulto a los delincuentes de ilícito comercio fue ordenada poco tiempo después de la disolución del virreinato del Nuevo Reino gobernado por Jorge de Villalonga. Una real orden de diez de octubre de 1725 surgida a partir de una consulta hecha por el virrey del Perú, el marqués de Castelfuerte, eliminaba la posibilidad de indultar delincuentes por contrabando como resultado de la imposibilidad que tenía el susodicho virrey de averiguar quiénes de ellos intentaban obtener el perdón por segunda vez con lo cual evadían fácilmente las penas que asociadas al delito. El interés original de perdonar contrabandistas consistía en obtener a cambio de su libertad la delación de los cómplices, lo cual había llevado a obtener información falsa con el mero propósito de ganar el indulto[[65]](#footnote-65).

También el presidente de la Audiencia de Panamá contaba con la facultad para perdonar a los delincuentes de ilícito comercio aunque bajo jurisdicción del virrey de Santa Fe. Un ejemplo de lo anterior fue el indulto que otorgó en junio de 1740 a Juan Silván y otros 64 franceses que se habían establecido en el sitio de Calidonia[[66]](#footnote-66) (Mapa 1) a quienes se les permitió con esta gracia establecerse en ese lugar a cambio de reconocer vasallaje al rey de España y comprometerse a “limpiar el Golfo de enemigos y defraudadores y embarazar la entrada tierra adentro”, además el virrey les concedió el permiso para poseer esas tierras, comerciar en el golfo y elegir un capitán que los gobernara. Finalmente, para que hiciesen corso se les dotó de tres piraguas con la condición de que todo lo que capturasen lo pusiesen a la venta[[67]](#footnote-67).

Eslava tuvo que enfrentar la defensa tanto del presidente de Panamá como del teniente de gobernador José Pestaña quien había capturado a una piragua de estos franceses que se había internado por el río Atrato para comerciar con artículos de contrabando en Citará. La audiencia de Panamá, que había prohibido el tránsito por ese río, acusó a Pestaña de haber violado la autoridad de esa corporación pero Eslava alegó que esto lo hizo solamente por haberse dejado llevar de su celo y que, al contrario, su ejercicio de la autoridad se había destacado en el aumento de los derechos reales recaudados en la provincia del Chocó durante su tenencia y que tales alegatos en su contra podrían proceder del gobernador del Chocó Manuel Martínez de Escobar al no querer Pestaña mezclarse en sus “intereses y negociaciones”. Como medida de protección para ambas autoridades indultó nuevamente a los franceses, según el virrey para evitar que se levantaran los demás franceses de Calidonia y se aliasen con los ingleses o los “indios bárbaros”, además de argumentar que habían sido eficaces en el ataque a los contrabandistas ingleses y facilitaban el tránsito de comunicaciones con Panamá, aclarando eso sí que no era un indulto que se extendiera a los demás franceses que llegaran a la colonia sino sólo incluía a aquellos que juraron fidelidad al rey y que eran considerados fugitivos de las colonias galas en el Caribe. También justificó el perdón en el hecho de que las necesidades de la guerra hacían que se tuviese que concentrar en hacerle frente y por lo tanto tendría que esperar hasta que llegara la paz para controlar el ilícito comercio que seguían practicando y reducirlos, puesto que carecían “de parte espiritual por haverse casado con indias infieles y por no sugetarse a dos Jesuitas que embió”[[68]](#footnote-68).

Mapa . Nueva Calidonia



Fuente: Plano particular de la bahía de Calidonia, 31 de marzo de 1761. AGI, Mapas y Planos, Panamá, 162.

La paradoja subyace en que parece que al momento de suprimirse la audiencia de Panamá en 1751 la relación entre el gobernador de la provincia y el virrey será más distante mas no conflictiva. Como mostró Muro Romero en la década de 1970, la gobernación de Panamá ganó una jurisdicción de facto sobre las provincias sobre las cuales no tenía competencia como eran Veraguas y Portobelo, sin que el virreinato de Lima, Santa Fe o la misma Corona le haya hecho oposición. Incluso cuando existe una recriminación por la superioridad de la gobernación esta se limita al ramo de hacienda, subordinando la jurisdicción del istmo a la autoridad del virrey como superintendente general de la real hacienda. A pesar de todo, será la distancia respecto a Santa Fe la que legitima la autonomía en las decisiones del gobernador de Panamá y la lógica que llevar los asuntos de justicia, gobierno e incluso hacienda con la consulta desde la capital del Nuevo Reino sería imposible y tendería al desorden[[69]](#footnote-69). Como se verá en el tratamiento de diferentes levantamientos de la tropa en las plazas de Portobelo y Panamá la decisión del gobernador no pasa por consulta con el virrey de Santa Fe ni los oidores de su audiencia[[70]](#footnote-70) y cuando la resolución está tomada se envía el informe al virrey. En el mismo sentido se manifestó el virrey del Perú, el marqués de Villagarcía, en una representación de enero de 1742 cuando consideraba era inconveniente el haber separado de su gobierno a los de Tierra Firme y Guayaquil, entre otras cosas por la dificultad que tendría el virrey de Santa Fe, muy alejado de dichas provincias, para demostrar su autoridad ante los agentes del ilícito comercio. Alegaba además que siendo Tierra Firme “la garganta del Perú”, asuntos que requirieran de pronta resolución y que podría ser resuelto por su autoridad, debería pasar por la mano del virrey del Nuevo Reino o antes de actuar solicitar providencias del mismo, lo que en la práctica, representaría la configuración de “una dependencia totalmente independiente en la obediencia y en la jurisdiccion”[[71]](#footnote-71).

Para el ámbito de la audiencia de Quito el presidente de la corporación podía ofrecer el perdón pero era el virrey quien lo debería ratificar, como efectivamente sucedió en la rebelión de 1765 cuando incluso Mesía de la Cerda tuvo que retirar sus órdenes de atacar la ciudad al enterarse de la resolución y el perdón obtenido por los oidores de Quito[[72]](#footnote-72). Sin embargo, como lo planteó Anthony McFarlane, esta ratificación significó la confianza de los habitantes de los barrios de que el perdón tendría un efecto real[[73]](#footnote-73). Es evidente que era claro para los rebeldes que la garantía del perdón no recaía sobre aquel que tuviera la facultad sino en quien tuviese la potestad de perdonar, esto es, no sólo en quien pudiera ofrecer un perdón en nombre del monarca sino en quien efectivamente tenía la autoridad para impedir que los jueces obraran contra aquellos que impetraron la benignidad del príncipe. No siempre existe esa desconfianza, pero como en el caso de los contrabandistas indultados y luego apresados por el teniente de gobernador Pestaña es importante tener la fuerza suficiente para apelar a la concesión de perdón de una autoridad superior al juez que pretende formar causa en contra suya.

Aun así, esta facultad de perdonar del virrey, junto con otras, no tenía el mismo peso en todas las provincias agregadas al virreinato. Una de las más independientes del brazo virreinal junto a Panamá fue la Capitanía General de Venezuela, con la diferencia que esta independencia estaba claramente expresada en los títulos de gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela y la ciudad de Santiago de León de Caracas. Tomo como ejemplo el título otorgado a Julián de Arriaga en reemplazo de Luis Francisco de Castellanos, durante plena conmoción por la rebelión de los isleños acaudillados por Juan Francisco de León en 1750, en la que simplemente se dice que éste tendrá “las propias facultades [e] independencia del virrey del Nuevo Reyno de Granada” tal como quedó definido desde una consulta del 26 de octubre de 1741 al Consejo de Indias por el gobernador de entonces, Juan Gabriel de Zuloaga[[74]](#footnote-74).

Finalmente esta interacción entre facultades graciosas, jurisdicción y autoridad se resuelve apelando a cada proceso particular. La decisión de utilizar el rigor o la clemencia dependerá no sólo del poder hacerlo (*iurisdictio*) sino de la prudencia y un cálculo de resultados posibles que implican la astucia del oficial y su círculo de autoridades. Como se verá en el apartado siguiente, la clemencia no se mueve tanto por la humanidad y el arrepentimiento como por la fuerza del oponente que la subyuga y obliga a tirar la espada al suelo y desprenderse de su potestad para castigar. Por lo menos en este periodo las rebeliones, si bien focalizadas y efímeras, aprovechan la debilidad de las autoridades para hacerlas capitular y evitar el castigo; sin embargo, es precisamente esta potestad clemente la que permite al juez solventar el conflicto y restablecer la *aequitas* que de otra manera conllevaría a la aplicación rigurosa de la ley y con ella el enfrentamiento hasta la victoria armada de uno de los bandos.

## Rebelión y perdón general

No es casualidad que el principal uso del perdón por parte de los virreyes y gobernadores recaiga en una estrategia para sofocar las revueltas, no sólo por ser parte integral de sus instrucciones sino por ser inherente a su función de ordenar y controlar a los habitantes de sus provincias. Es posible considerar que el gobierno de Eslava estuvo en relativa calma social toda vez que su tarea estuvo enfocada en la defensa de la costa Caribe de Tierra Firme y, aún a pesar de los enfrentamientos que tuvo con las redes de poder cartagenera que se extendían hasta el mismo corazón del gobierno de la Audiencia, no tuvo que lidiar con un desorden de grandes dimensiones en la provincia. Lo anterior no significa una ausencia de rebeliones durante el mandato de los virreyes Eslava, Pizarro y Solís, al contrario, estos tuvieron que lidiar con levantamientos efímeros de poca expansión territorial pero que tuvieron que ser resueltos ya fuese con la aplicación rigurosa de la justicia o del disimulo del perdón y olvido.

### El uso de la prudencia y la clemencia en los levantamientos de la tropa

Como lo ha mostrado Juan Marchena al estudiar los levantamientos de tropas en las plazas de América, la correlación entre autoridad y desobediencia era sumamente desigual ya que la necesidad de la Corona era superior al interés por servir a la corona en tales puestos. En este sentido, dice Marchena, “El silencio y el perdón reales, sobre todo cuando se atravesaba un periodo de guerra, cerraban el expediente. Hubo escasos castigos (sólo cuando los alzados eran pocos), y quedaba para el futuro remover a la guarnición de aquella ciudad [Cartagena], lo que casi nunca fue posible; ni siquiera se podían licenciar tropas, al no haber con quién reemplazarlas”[[75]](#footnote-75). De los levantamientos indicados por este autor que sucedieron en América desde 1710 hasta 1787 la situación es casi siempre la misma: la tropa se subleva como protesta por no recibir su sueldo, bloquean y amenazan la ciudad, realizan una serie de peticiones que incluyen el perdón y finalmente son cumplidas todas sus demandas[[76]](#footnote-76).

Al momento de levantarse la tropa en Cartagena la situación de Eslava en la corte y en la ciudad no era la mejor. En España el virrey tenía enemigos poderosos vinculados al partido del Marqués de la Ensenada interesados en impedir su nombramiento como virrey del Perú, además, en Cartagena había ejecutado una estrategia para granjearse la afectividad de las redes de empleados de gobierno y militares tanto de la provincia como de las demás gobernaciones del reino, aunque en realidad no logró obtener los nombramientos que solicitaba y por lo tanto generó más animadversiones que alianzas[[77]](#footnote-77). Según lo analizado por Juan Marchena la situación de Cartagena era de una tensión general entre la tropa mal alimentada, mal vestida y sometida a un medio ambiente hostil para soldados completamente extraños al trópico cartagenero[[78]](#footnote-78). Además, la indisciplina era evidente como quedó escrito en las *Noticias secretas* de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, en las cuales se dice que las compañías no estaban completas pues hacían falta muchos hombres para completar los 770 asignados a la plaza, además, las garitas y puestos de vigilancia permanecían desatendidos y en no pocos casos lo estaban por hombres de mayor edad, completando este escenario la permanente deserción de soldados que se introducían al país o trataban de alcanzar al Perú en busca de vincularse al comercio[[79]](#footnote-79).

La rebelión estalló en un momento crítico para Eslava pero propicio para las élites cartageneras, entre quienes estaba Melchor Navarrete, quienes sabían que era una oportunidad para debilitar aún más la autoridad del virrey[[80]](#footnote-80). Las acciones iniciaron el día dos de abril de 1745 cuando bajo el grito de “Viva el rey, muera el mal gobierno” los batallones España, Aragón y de Plaza se levantaron contra la medida que les retuvo catorce y medio reales de sus sueldos pagados el día anterior. Es clara una coordinación previa a la ejecución del levantamiento ya que como menciona el *verdadero diario* “aconteció en un breve espacio de tiempo y cuasi con igualdad de instantes en todas partes sin dar lugar a comprehender el subsesso con alguna propiedad”[[81]](#footnote-81); sin embargo no es asimismo evidente una coordinación con las familias de la ciudad o un complot previo al levantamiento. Tampoco fue un alzamiento injustificado ya que si bien el pago solamente fue rebajado las condiciones de vida de estas tropas en la plaza caribeña no eran nada halagüeñas, lo cual era una situación común no sólo en Cartagena sino además en Portobelo y Chagres, puntos donde por una parte las fortalezas estaban deterioradas, las dotaciones reglamentarias eran deficientes y las tropas estaban escasamente pagadas, sumándose a la continua queja de un mal clima y frecuentes brotes de enfermedades tropicales[[82]](#footnote-82).

Las tropas redujeron a los oficiales, amenazaron a los vecinos y hacían disparos al aire frente a la casa del gobernador y del virrey, incluso obligaron a participar aquellos soldados que no quisieron participar o no sabían del levantamiento. Los soldados tomaron el control de la plaza con rapidez y sin resistencia. Los oficiales asumieron la prudencia al considerar que en caso de intentar reprimir con artillería serían fácilmente superados e indudablemente se perdería la plaza “y por consiguiente quedar expuesto todo el Reino”[[83]](#footnote-83).

Después de tomarse la plaza los sublevados eligieron comandantes, dieron órdenes para que los barrios se mantuviesen en orden prohibiendo la ingesta de bebidas alcohólicas, para luego buscar al gobernador para iniciar la negociación de sus demandas. En el diálogo intervinieron los comandantes nominados por los soldados, el gobernador y el padre Jerónimo Gross, rector de la Compañía de Jesús, quienes justificaron ante el rey que todo el tiempo trataron de hacer entrar en razón a los sublevados “manifestándoles el atraso de la Real Hacienda y las diligencias presentes de guerra, y que admitiesen un doblón de gratificación y que se empeñaría con S. E. para que se esforzarse a costearles un vestido blanco” ante lo cual habrían encontrado sólo ánimos “arrebatados” y “descompuestos”, incapaces para el diálogo.

Al siguiente día habían cercado la casa del virrey e incluso apuntaron los cañones hacia esa residencia con la amenaza de hacer fuego en caso de no obtener lo demandado, aunque gracias a las negociaciones del gobernador y el rector se suspendió la amenaza por 24 horas. Fue tras esta amenaza y la imposibilidad de hacer frente a los sublevados que Eslava habría accedido a reintegrarles los catorce y medio reales que habían sido retenidos. Al parecer la noticia habría generado una reacción de efusión acompañada de bebida y fiesta que impidió que durante el día cuatro se sosegaran los ánimos. Para el día quinto los sublevados prepararon las condiciones de su reintegro a sus funciones y dictaron las reglas como se había de hacer el instrumento del perdón, “sobre que no admitieron innovación alguna aunque se les reconvino, con lo ynforme que venia”. El problema de desconfianza mutua impidió que los soldados aceptaran recluirse en sus cuarteles después del perdón para recibir sus pagas, en contraposición, ellos exigieron que la erogación se hiciese en los playones de San Lázaro[[84]](#footnote-84) en la isla de Manga (véase Mapa 2), un detalle que muestra el dominio de la situación pero además la suspicacia por un eventual incumplimiento de los oficiales de la tropa.

Mapa . [MAPA DE CARTAGENA[[85]](#footnote-85)]



La ceremonia de perdón exigida por los soldados aparentaba ser caótica y en cierto sentido incluso herética. La exigencia de los sublevados consistía en la presencia de todas las autoridades de la plaza, esto es, las comunidades religiosas, los cabildos secular y eclesiástico, los tres inquisidores, el gobernador, el virrey y “últimamente su Divina Majestad Sacramentado, ante cuya presencia debían ofrecer todos los referidos el perdón y olvido de este suceso”[[86]](#footnote-86). La simbología en este sentido es clara: el perdón debía darse por las dos majestades, divina y humana, lo cual excluía tanto la excomunión como el enjuiciamiento. Marchena afirma que la ceremonia es una evidencia de cómo “estos sectores populares manejaban perfectamente los códigos de la élite”[[87]](#footnote-87), sin embargo parece que más que manejar sus códigos hicieron una interpretación propia de la ritualidad que de seguro habrían visto en otras ceremonias de indulto general, como la de viernes santo o en las consecuentes a las rendiciones de plazas tras la guerra.

Los oficiales quisieron dejar claro en el *diario* su oposición a este ceremonial y antes de describirlo dejó claro el redactor que “no puede la pluma exprimir la conmoción que causó en los ánimos esta propuesta” así como los esfuerzos de doctos, sacerdotes y el arcediano para impedir que se llevase a cabo tal rito, lo cual no habría podido lograrse porque los soldados estaban en un estado irreflexivo, “dominados de la bebida”, en permanente amenaza de que se desatara la violencia más irracional por la permanente amenaza de las armas[[88]](#footnote-88). Con esto quedaría justificado el esfuerzo del gobierno que se vio superado por la irracionalidad pero no por la malicia de los soldados.

La descripción de la procesión realizada por el redactor del *diario* fue como sigue:

Amaneció el día 7, singular para Cartagena y aún para todo el Orbe Católico; en ella se vio lo que aún entre los bárbaros gentiles no imaginaron con sus dioses falsos. Obligaron con las armas en las manos y amenazando a que la Majestad Divina Sacramentada saliese en su solicitud, que aunque como ovejas perdidas es propio de su inmensa piedad, aquí no tiene cabimiento esta pía consideración, pues el furor y la ira gobernó este movimiento y no el arrepentimiento y la humildad. S[u] E[xcelencia], absorto de este caso, negándose hasta los últimos [[instantes]] a semejante propuesta, cuando imaginó con todos que ni a S[u] E[xcelencia] le era decoroso el hecho, se halló que por la frente de su palacio, pasaba Su Majestad Sacramentada en forma de procesión acompañado de los señores Venerable Deán y Cabildo, Inquisidores [que oficiaron] Cabildo [[eclesiástico]] con su Gobernador, Religiones, gran número de clero, todo el vecindario y forasteros con igual obstentación, aunque con mayor numero de gentes que el día del Corpus, y, viendo éste no creído suceso solo prorrumpió estas palabras: pues si va Dios Sacramentado, ¿por qué no he de ir yo?, y partió al instante y se incorporó a la cabeza de la Ciudad, seguido de dos o tres de su familia, el Oficial de Órdenes, y unos ocho hombres de la guardia del gobernador que le dejaron los mal contentos [por haverle retirado a S[u] E[xcelencia] la que le havian puesto.] En esta forma fueron conduciendo a S[u] M[ajestad] Sacramentada a la Media Luna, y de este modo lograron su desaforado intento, que en aquel estrecho lance se eligió como único el desesperado arbitrio de dos males el menor[[89]](#footnote-89).

Hubo en este ritual una clara imitación de la procesión del Corpus Christi y aunque el perdón estuvo presente en prácticamente todas las celebraciones religiosas importantes[[90]](#footnote-90) los sublevados tomaron como modelo dicha liturgia. Los detalles particulares de la procesión no fueron narrados con detalle, antes bien se destacó el hecho de que los soldados no fueron movidos por la piedad, la humildad y el arrepentimiento sino por la ira; además destacaron que en todo momento las autoridades de la monarquía y la iglesia estuvieron descontentas con el espectáculo, incluso intentaron tomar la cabeza y marcar el orden de la procesión[[91]](#footnote-91). Esta forma de obtener el perdón era muy importante para los soldados sublevados, los mismos diputados de la iglesia de Cartagena le comunicaron al rey que los militares insistieron que “para seguro del perdon avia de salir este cavildo procesionalmente con el santisimo sacramento y asistencia del Virrey hasta la media Luna donde se hallava esperando toda la tropa” y fue la única forma a la que accedieron a recibir el perdón y desistir del levantamiento[[92]](#footnote-92). Lastimosamente para Eslava sería esta procesión el agravante a su incapacidad de sofocar el levantamiento mediante el adelantamiento de las averiguaciones necesarias para conocer y comprobar la culpabilidad de los insurrectos y decretar los castigos “proporcionados a la enormidad de la culpa, denigrativa al honor de sus armas mucho mas por el sacrilego atentado de precisar que se sacase procesionalmente para su recoleccion y quietud al Santisimo sacramento, impiedad no creible entre españoles que hace indignos de serlo á los que la cometieron, es la que á SM ha causado mas dolor y commocion”[[93]](#footnote-93).

El perdón general (ver Anexo 1) otorgado por Eslava en nombre del rey y que sería firmado por las autoridades seculares y eclesiásticas de la ciudad[[94]](#footnote-94) comprendió una amplia indulgencia de los delitos que pudiesen achacarse a la tropa, sus líderes e incluso fueron capaces de obtener la inmunidad eclesiástica y regia. Una de las particularidades de este indulto consiste en que el juramento fue dirigido de las autoridades hacia la tropa, es decir, las autoridades juraron ante Dios y en presencia del Señor Sacramentado que no actuarían en contra de los soldados comprendidos en la sublevación, sin que hubiese ninguna exigencia a los partícipes del levantamiento, como generalmente se realizaba en estos casos. En atención a la tradición, la costumbre consistía en que los sublevados se presentaban ante las autoridades jurando fidelidad al rey y arrepentimiento ante sus acciones, asegurando que se habían hecho por ignorancia o engaño mas nunca con maledicencia; por lo tanto impetraban la piedad del gobernante para que en uso de su facultad invocara la regia presencia del monarca y así perdonara a los involucrados demandando que estos no recayeran en sus acciones. Hay en este perdón una caución juratoria, una garantía de la promesa, pero esta no es la de los rebeldes que se comprometen a no levantarse nuevamente sino de las autoridades que prometen no arremeter judicialmente contra la tropa “vajo las penas y apercevimientos en que yncurren los que lo quebrantan, con el poderío, sumisión, y renunciacion necesaria”[[95]](#footnote-95).

A Felipe V no sólo le parecía que el perdón era irregular sino inmerecido. En dos comunicaciones al virrey comparó la indisciplina de la tropa sublevada con el heroísmo de los ejércitos españoles desplegados en Italia. Subrayó el desacato de los insurrectos y demeritó las quejas de estos al señalar que los españoles eran ante todo leales defensores del honor de la patria sin importar el sufrimiento y fatigas a las que se enfrentaran. El rey exaltaba el hecho que la tropa del ejército en Italia no había cesado de trabajar sin importar la estación del año, la escasez ni la desnudez, avanzando incluso cuando fueron sitiados y no pudieron recibir suministros por haberse cortado las vías de comunicación, aun así “ni se contó un desertor, ni se oyó la menor palabra de queja, ni alguna, que no verificara su disposicion al empeño, su constancia, y su lealtad”[[96]](#footnote-96). Ante el heroísmo mostrado por la tropa española en Italia (que dos años después protestará por la falta de víveres y estará en crisis por las masivas deserciones[[97]](#footnote-97)) no habría justificación ni para la rebelión ni para la clemencia.

El rey le manifestó de manera reservada al virrey que no confirmaba el perdón que le había otorgado a los sublevados pero tampoco castigaba a Eslava por su acción[[98]](#footnote-98). Afortunadamente para el virrey el rey envió una comunicación firmada el 25 de agosto de 1746 en la que “condesciende” a los ruegos y súplicas de la tropa, que eran más bien los del virrey y el gobernador de Cartagena, para aprobar el indulto, con la advertencia que debería procurar no se generase un nuevo desorden y se borrara de la memoria el hecho para que la tropa recobrase “el glorioso timbre de verdaderos españoles”. Sin embargo también deja claro, como un padre ofuscado pero benigno, que los restituía a su gracia pero que deberían en adelante ganar la gloria de sus antepasados para mantener su respeto y honor[[99]](#footnote-99).

La rebelión de 1766 en Panamá es interesante en tanto se presenta pocos años después de la reforma militar de Carlos III planteada para las posesiones americanas tras la evidente debilidad mostrada por las fortalezas indianas durante la guerra de los Siete Años, específicamente tras las derrotas en La Habana y Manila por los ingleses. Aunque el recuerdo del triunfo en Cartagena estaba vigente la realidad de un ataque mejor organizado de la armada británica que finalmente logró hacer rendir una fortaleza como la habanera que incluso había resistido por más tiempo que la cartagenera en 1741[[100]](#footnote-100). La rebelión de 1766 se dio en un contexto bastante complejo para los imperios atlánticos, pero su desarrollo y resolución fueron, por decirlo de alguna manera, tradicionales. Las peticiones de la tropa y el sometimiento a sus demandas por parte del gobernador no fueron del agrado del virrey, como tampoco había sido el perdón de Eslava antes, pero no había allí ninguna referencia a un cambio de estrategia, como se estaba planificando por parte de las autoridades tras el resultado de la rebelión de los Barrios de Quito en 1765 que llamó la atención respecto de la necesidad de cambiar la costumbre prudente con la que se resolvían los conflictos[[101]](#footnote-101).

La rebelión de Panamá se presentó como tantas otras por la exigencia de aumentar el Prest de ocho a trece reales y de anular descuentos como el pago de uniformes, inadecuados para la vida en regiones tropicales, eliminar la obligación de comer en rancho, que no se encerraran en los cuarteles a la mitad de la tarde y que se eliminaran los azotes. Si bien el gobernador resaltó en sus informes el hecho de que tuvo que claudicar a las demandas de los sublevados por causa de que estos repitieron las acciones que llevaron a Eslava a concederles todas sus demandas, lo cierto es que la tropa en su representación (Anexo 2) tuvo como referente la plaza de La Habana, la cual había vivido dos levantamientos de la tropa en 1761 y 1765[[102]](#footnote-102), a quienes se les había concedido el pago de su antiguo Prest por ocho reales, aunque arguyeron que para Panamá requerían un salario mayor por estar en una ciudad con mayores carencias que La Habana[[103]](#footnote-103).

La estrategia de la tropa fue de nuevo similar a la de otros levantamientos de la primera mitad del siglo XVIII en América: la tropa se alza de una manera aparentemente espontánea, someten a las autoridades principales (en este caso al gobernador José Blasco de Orozco), capturan los almacenes de armas y municiones, decomisan la artillería, toman la caja de la Real Hacienda y amenazan con destruir la ciudad si se oponen a su levantamiento. El dominio de la tropa sobre la ciudad levantada era absoluto y las autoridades se veían forzadas a negociar intentando ceder lo menos posible, lo cual era imposible. Al segundo día de la sublevación el gobernador le escribía al marqués de la Vega informándole de la situación y manifestándole que habiendo perdido la plaza, sin municiones ni armas, careciendo de caudales y gente para hacer oposición, además de estar prácticamente preso en su casa por la guardia que lo vigilaba y controlaba las personas que entraban y salían de su casa, todo esto impedía negarles cuanto le pedían, añadiendo “que me hallo en igual situazion á la que se vio en Cartagena el señor don Sevastian de Eslava quien les acordó quanto le pidieron”[[104]](#footnote-104).

Como se mencionó arriba una de las justificaciones del gobernador para conceder las demandas de los sublevados fue que “No faltaria entre ellos quien hiziese p[rese]nte el levantamiento de 1745 y á las ordenes de un general de la opinion del señor don Sebastian de Eslava, pues en los mas de los puntos fue identico con aquel y si en algunos se diferencia todos favorezen la precision de mi obligada condescendencia.[[105]](#footnote-105)” Incluso diría que su estado era más complicado que el de Eslava pues “Al señor don Sebastian de Eslava no le pusieron centinela con orden de que no le dejasen salir, en su casa no impidieron la entrada á nadie á todas horas, toda la tropa estava la mas subordinada á quanto decía el Sargento [Bartolomé] Pabon que los mandava y al segundo dia expusieron las solicitudes que tenian.[[106]](#footnote-106)” Finalmente, dejaba claro a los secretarios Arriaga y Muniain que si Eslava, “un general digno de tan eterna memoria”, pudo conceder y ganar los títulos que obtuvo él podía hacer lo mismo en una posición más desventajosa.

Sin embargo, en comparación, la tropa de Panamá tuvo una mayor disposición a negociar que la de Cartagena. El general nombrado por ellos le había dicho desde el principio al coronel del regimiento, Mateo de Eyzaguirre, que sabía que habían errado pero el único remedio era negociar. Tampoco cedieron a sus demandas como en Cartagena, pero esto era básicamente porque sabían que tenían la ventaja operativa, no sólo por el total control de la ciudad, sino por la capacidad de permanecer levantados varios días más sabiendo que recibirían los refuerzos del resto del regimiento de la reina que arribaría el día 29 de septiembre. En este estado el gobernador sabía que la rapidez era la clave, si se podía hacer entrar en razón desde el principio a los sublevados y hacerlos retornar a la obediencia sería posible olvidar todo sin mayores consecuencias, sin embargo la actitud de las autoridades no era tan condescendiente, como cuando el obispo se negó a darles misa a los sublevados respondiéndoles que él “no decía Misa a excomulgados”, lo cual resultó en un descontento que por poco descontrola la situación.

Tampoco tenía el gobernador interlocutores válidos en el otro bando. Fueron varias las quejas de que los comandantes escogidos por la tropa no tenían poder de decisión y que todo debía ser consultado nuevamente en asamblea. Esta situación se tornó más compleja cuando “una mugerzuela” les dijo que lo negociado por el general de los sublevados, el obispo y el coronel del regimiento, era una estratagema para luego poderlos sujetar con la tropa. En ese momento se rompió la posibilidad de llevar al oidor electo de la audiencia de Quito, Isidro de Alvear, para que definiera los términos que por derecho podían garantizar las demandas de los sublevados. En cambio, se redoblaron las medidas de seguridad de la tropa, se volvieron a apuntar los cañones en la ciudad, que habían sido retirados tras las negociaciones, para finalmente deponer y arrestar al sargento mayor que antes fungía como general. Esta estrategia que fue tan compleja para la negociación por parte del gobernador fue harto efectiva para la tropa, ya que en general el comandante negociador sólo tenían la posibilidad de llevar los discutido previamente con los soldados del regimiento, así, aunque pudiesen estar de acuerdo con el gobernador o considerasen necesario ceder en algún punto, no podían hacerlo pues el pleno de la asamblea no lo aceptaba; de hecho llegaron a decirle al gobernador que ellos difícilmente podrían controlar a los soldados si estos se salían de control, mas cuando estos tenían “la ciudad en manos de unos hombres voluntariosos” [[107]](#footnote-107).

Finalmente, la representación de los soldados fue aceptada por el gobernador, el coronel Eyzaguirre y el oidor Albear, bajo la justificación de que era su “justo deseo” que no se arriesgara la plaza ante la amenaza de “unos hombres que no dejaban el aguardiente, que el delito les impelía y el demonio [léase rumor] que no vela les atizaba”[[108]](#footnote-108). Esta consistió en siete puntos: el primero, tras su identificación como soldados del regimiento de la reina, fue la petición del Prest de 13 reales pues con los ocho que recibían era imposible sostenerse; el segundo manifestaba la dificultad de comer en rancho (fundamental para la disciplina militar) por las complicaciones que implicaba el cocinar los alimentos en la plaza y que en ocasiones había llevado a intoxicaciones masivas; en tercer lugar manifestaban que una solución posible sería que se les dieran licencias para cultivar la tierra; el cuarto punto comprendía que no se les encerrase en el cuartel al atardecer pues “nos melancolizamos”; el quinto consistía en la exigencia de la eliminación del rancho y, ante la posibilidad de que los soldados utilizaran el dinero destinado a alimentación para jugar y beber, se comprometieron a castigar a quien usara el Prest para “desbordarse”; el sexto punto fue la exigencia de la eliminación de los azotes con el que se les castigaba como “niños ó viles esclavos”[[109]](#footnote-109); finalmente, el séptimo punto fue la petición de perdón transcrita en el Anexo 2.

La petición de perdón por su parte contiene varios elementos que merecen ser comentados. En primer lugar está el impetrar perdón partiendo de aceptar la falta, con lo cual hay una manifestación expresa de un delito que se desea borrar, y la justificación de haber actuado sin ninguna señal de maledicencia, al contrario, impulsados por la “opresión” y “extrema necesidad”, con lo cual queda en evidencia que nunca hubo una actitud premeditada de oponerse a la soberanía del rey ya que, como hombres del antiguo régimen, sabían que ningún delito de lesa majestad podía ser perdonado[[110]](#footnote-110). Por otra parte se impetra la concesión del perdón y no lo exigen sino lo “esperan”, queda aún a voluntad del monarca, aunque para garantizarlo piden que el compromiso del perdón sea jurado “bajo del seguro de yglecia” y “sobre los quatro Evangelios”. Expresamente garantizan el perdón acudiendo a su forma más tradicional: la confluencia de la misericordia divina y la piedad real, por ello solicitan la presencia de las autoridades de ambos fueros: el obispo de la diócesis, el teniente de Rey, los cabildos eclesiástico y secular, así como los principales de la ciudad. El juramento sería conforme a la piedad del rey, por lo cual no podría existir ningún castigo y para materializarlo, se guardó una copia de la representación en el archivo de la catedral, lo cual parece responder a la necesidad de prevenir el acceso al fuero secular al acuerdo y poder contar con la amnistía eclesiástica y en caso necesario prevenir los recursos de fuerza[[111]](#footnote-111). La petición termina con la fórmula tradicional: “asi es de Justicia y esperamos alcansar de su señoria”, pero se añade una adenda al perdón que consiste en la expresa manifestación de la lealtad y sumisión al soberano, manifestada en la entrega de la plaza, las llaves, los almacenes y a marchar desde la iglesia a los cuarteles sometidos a la obediencia de sus oficiales para reasumir la defensa de la plaza y el servicio del rey. Lo anterior es una manifestación de que después de obtenido el perdón los soldados ofrecen restitución al rey, con lo cual se impone “perpetuo silencio” en la materia[[112]](#footnote-112). El uso de la *restitutio* será tratado con mayor detalle en el siguiente apartado, pero no deja de ser interesante como los soldados, no queda claro si con la colaboración del letrado oidor Albear, presentan de una manera algo burda los elementos fundamentales de la petición de perdón, de una manera mucho más clara por lo menos que en el caso de los cartageneros de 1745.

El ritual no tuvo el carácter cuasi herético del de Cartagena, al contrario, la tropa se reunió en la catedral y tal como indicaba la representación se hizo la lectura del decreto de perdón (que no encontré en el legajo) ante las autoridades de la ciudad, incluso se hizo en presencia de la divina majestad sacramentada pero ésta nunca salió en procesión, sino que reverencialmente el gobernador juró ante esta imagen y con la mano en los evangelios que cumpliría lo allí firmado, respondiendo la tropa en voz alta que juraban obediencia, guardar fidelidad y subordinación[[113]](#footnote-113). Después de esto obtuvieron su papel de iglesia firmado por el obispo con el que se certificaba su perdón y durante los tres días siguientes recibieron sus pagas.

El gobernador en este caso apenas recibió una amonestación del virrey Mesía de la Cerda que le dijo que veía con “pequeño disgusto” lo ejecutado con la tropa, aunque entendiendo que era lo más prudente y no había otro arbitrio para remediar la situación. Le solicitaba en todo caso que lograra apaciguar los ánimos con el fin de enviar la tropa necesaria para Quito donde se les pagaría el Prest de ocho reales, pues no habría necesidad de hacer novedad para el servicio en ese país. También le advertía que actuase con cautela y precaución con el resto del regimiento de la reina que aún estaba en Portobelo con el fin de evitar una nueva sublevación[[114]](#footnote-114). Todo indica que el perdón se cumplió a la perfección, pero no así los sueldos ni las demás demandas, así que al siguiente año el regimiento de la reina se subleva nuevamente en Panamá, amenazando aún con mayor rigurosidad la integridad del gobernador, quien nuevamente tiene que ceder y concederles el perdón general, una vez más, por sus nuevas faltas[[115]](#footnote-115).

Para finalizar este apartado se debe resaltar la estrecha relación, simbólica y práctica, entre los fueros real y eclesiástico para la petición y concesión de los indultos generales a la tropa. No son pocas las ocasiones en que los sublevados se refugian en sagrado como mecanismo para escapar de la justicia ordinaria[[116]](#footnote-116), por lo cual también era fundamental la intermediación de la iglesia católica para que los obispos en la jurisdicción de sus diócesis pudieran servir de intermediarios para la concesión del perdón real. Un ejemplo de lo anterior se presentó en Panamá en 1751 cuando una parte de la tropa reglada del batallón se refugió en la iglesia de Santa Ana del arrabal de la ciudad, en ese caso el gobernador, Manuel de Montiano, contó la tropa suficiente como para cercar la iglesia y así frenar de inmediato cualquier negociación. Para evitar el inminente castigo, los soldados pidieron perdón al gobernador por intermedio del obispo de Nicaragua “a cuya protección se acogieron”, por lo que tras desistir de sus pretensiones salieron de la iglesia y se les remitió de la pena que les correspondía por su delito[[117]](#footnote-117). Si bien en este ejemplo la decisión de refugiarse en la protección del obispo parece responder a un impulso prosaico de protección ante el inminente castigo, el hecho es que la iglesia brindaba un manto protector ante el padre castigador que ninguna otra autoridad podía conceder. No habría que pasar por alto las imágenes religiosas de la clemencia presentes en las catedrales y las sepulturas europeas desde la edad media, como la representación de la Virgen de la Misericordia cubriendo a sus hijos con su manto protector (Ilustración 1), apropiadas en la mentalidad del soldado del antiguo régimen fuertemente imbuido por la religiosidad popular. Por lo anterior, si bien es extraño y casi herético el hecho de sacar la imagen de la divina majestad sacramentada en una improvisada procesión, no es ilógico que se apele a la intermediación de esta imagen religiosa cada vez que sea necesario el perdón de los pecados, porque valga recordar que en la doctrina católica es a través del sacrificio místico del cuerpo de Cristo, de su cuerpo y sangre, que los pecados son redimidos diariamente y quedaban postulados en la oración cuando recitaban “dimitte nobis debita nostra”[[118]](#footnote-118).

Ilustración . La representación del manto protector de la Virgen de la misericordia



Piero della Francesca, *Polittico della Misericordia*, témpera sobre tabla, ca. 1445, tabla central.

### La rebelión de León contra la compañía Guipuzcoana y su perdón

La rebelión de Juan Francisco de León en Caracas de 1749 es una posibilidad interesante para revisar el ejercicio del perdón en una provincia recientemente integrada a la autoridad virreinal pero cuyo ejercicio jurisdiccional era de por sí bastante independiente del virrey. Caracas no sólo era una gobernación que compartía muchas similitudes con Panamá en términos de su disociación con Santa Fe, en primer lugar porque dependía de la jurisdicción de la Audiencia de Santo Domingo y en segundo lugar porque desde 1741 las provincias venezolanas serían independientes del virrey del Nuevo Reino de Granada, un proceso que haría ganar cada vez mayor fortaleza jurisdiccional hasta ganar el título de Capitanía General en 1777 y sede de Real Audiencia una década después. Aunado a esta independencia jurisdiccional, la provincia de Caracas sería campo de experimentación para las compañías de comercio, específicamente en la distribución del cacao, con la creación de la compañía Guipuzcoana[[119]](#footnote-119) y sería contra este monopolio que se realizarían los dos levantamientos de León y sus compañeros.

Siguiendo la hipótesis de Robert J. Ferry, esta rebelión se desató por una creciente tensión entre la compañía y los pequeños productores de cacao de origen canario asentados en el valle del Tuy[[120]](#footnote-120), quienes se veían impedidos para exportar el fruto a precios diferentes a los impuestos desde la compañía, que desde 1745 se encontraban en picada. Además, la persecución al comercio ilícito por la costa de La Guaira obligaba a estos productores a vender sus cosechas en Caracas, lo cual significaba un aumento significativo en el costo de transporte del grano, aunque en la práctica esto significó que los canarios comenzaran a buscar alternativas en el contrabando que anteriormente no habían contemplado[[121]](#footnote-121). Lo anterior, aunado a la creciente animadversión entre vizcaínos y canarios, incendiaron una rebelión que si bien no fue de grandes dimensiones, fue lo suficientemente fuerte como para suspender el ejercicio de la compañía guipuzcoana por unos cuantos años. Como en otras rebeliones la Corona sospecha de la intervención de las élites locales, sin embargo ni León ni los demás cabecillas harían claridad sobre su nivel de participación o si éstas habían impulsado el levantamiento. Lo que fue indudable fue quiénes participaron en la marcha de abril de 1749 hacia Caracas: cultivadores humildes de rango medio y bajo dentro de la sociedad rural de la provincia[[122]](#footnote-122).

No es el propósito de este apartado hacer un recuento de los eventos de la rebelión, toda vez que Robert J. Ferry realizó un detallado recuento y Kuethe y Andrien una excelente síntesis de su relato[[123]](#footnote-123); sino profundizar en la ambigüedad de las acciones de los oficiales de la Corona que variaron entre la negociación, el perdón y el castigo, cada uno desde la perspectiva de gobierno de un oficial. Cuatro oficiales intervinieron directamente para finalizar la rebelión: el gobernador de Caracas Luis Francisco de Castellanos, el comisionado de la Audiencia de Santo Domingo Francisco Galindo, el gobernador Julián de Arriaga y el gobernador Felipe Ricardos.

La primera negociación fue asumida por el cabildo en pleno, eclesiásticos de la ciudad y el gobernador Castellanos, sin que se lograra otra cosa que intentar que los alzados no entrasen a Caracas con toda su fuerza. En efecto, León y un pequeño grupo que lo acompañaba se dirigió al gobernador y le pidió la expulsión de los vizcaínos, que el gobernador se quedase en Caracas y que le diera el perdón a él y a su tropa, a lo cual accedió Castellanos[[124]](#footnote-124). Dos semanas después, Castellanos huye y se refugia en La Guaira, lo cual hace que cambie el tono de la protesta y se convierta en insurrección. La ciudad, que veía con simpatía la rebelión de estos humildes cacaoteros, se torna contra ellos cuando descubre que León puede ser acusado de crimen de Lesa Majestad y en precaución denuncian su comportamiento y manifiestan su lealtad al rey[[125]](#footnote-125). Para agravar las cosas, corrió el rumor entre los vecinos de Caracas que se fraguaba una revuelta de negros lo que generó un estado de conmoción tal que el gobernador tuvo que escribirle al marqués de la Ensenada diciendo que este cotilleo había sido generado por el teniente de Gobernador, Domingo de Aguirre, y el brigadier, gobernador y capitán general de Nueva Andalucía, Cumaná y Cumanagoto, Gregorio Espinosa de los Monteros; quienes habrían tramado este desorden para luego pretender impetrar el perdón del rey sustentado en el mérito de haber sosegado y sujetado a los esclavos[[126]](#footnote-126).

Ante el evidente descontrol surgido tras la huida del gobernador Castellanos, se pusieron en marcha dos planes de contingencia. Por una parte desde la audiencia de Santo Domingo se enviaron tres barcos con tropa comandados por el oidor Francisco Galindo Quiñones y Barrientos. La acción del magistrado en Caracas fue corta y sin mayores resultados ya que su estrategia consistió básicamente en asegurar la pacificación de la provincia y dejar que la corona decidiera el camino en adelante[[127]](#footnote-127). Ya desde Santo Domingo le escribiría a la corte resaltando su actuación para mantener la paz, especialmente conciliando con el teniente de Gobernador Aguirre para evitar que los rebeldes atacaran al gobernador. El oidor también manifestó que fue gracias a su pronta actuación que se logró contener el levantamiento de los negros quienes se habrían organizado en cuadrillas e incluso consiguieron interceptar unas cartas para el gobernador, todo esto sin más acción que la aplicación ordinaria de la justicia[[128]](#footnote-128).

En noviembre, ocho meses después de iniciado el levantamiento, las tropas de Julián de Arriaga provenientes de Cádiz desembarcaron en La Guaira. Tras el arribo de los soldados del rey el temor cundió por la ciudad de Caracas, temían que la represión alcanzara no sólo a los sublevados sino a la ciudad en general; sin embargo, la confianza de Arriaga era tal que con un pequeño grupo de tropa avanzó hasta Caracas donde entró sin problemas, luego envío con un escribano el ofrecimiento de perdón con la condición de que se retirase él y todos los sublevados a sus casas en menos de 24 horas[[129]](#footnote-129). En el traslado de esta comunicación el escribano se encontró con León entrando a la parroquia de la Candelaria de Caracas donde fue amenazado por la tropa con hacer fuego, deteniendo la orden los oficiales debido a que los amotinados gritaban “viva el Rey” y León solicitó permiso para hablar con el gobernador, el cual se le concedió con la condición de que fuese únicamente para pedir perdón y someterse. Arriaga le comunicó al Consejo de Indias que “Leon paso solo y despues mucho numero de los suyos, y que incados de rodillas, pidieron perdon, que les concedió en nombre de SM, con lo qual se fue Leon á su casa y los demas de dentro y fuera de la ciudad á las suyas”[[130]](#footnote-130). Tres años después, el presbítero José Martínez de Porras, para librarse de las acusaciones que entonces hizo el gobernador Felipe Ricardos en su contra, indicó que el hecho que León y los suyos fuesen gritando “Viva el Rey Nuestro Señor Don Fernando” fue gracias a que él lo había aconsejado, además hizo una descripción de la misma escena del arrepentimiento de León:

Vine a la plaza y el señor governador dió una carta al señor Arcediano para que la leyese á aquel vulgo tumulturado prometiendoles perdonarles en nombre de SM si se rindiesen en el termino de media ora, porque de no pasado este corto termino havia dado orden de que hiciesen fuego. Leida la carta me abrazé yó con Leon persuadiendole a que depusiese el deprabado intento que traía, porque de no deponerlo se perdía él y nos perdía á todos. Concurrió el Serño Arcediano con la misma eficacia que yó y logramos que se rindiera Leon, y lo presentamos en la plaza al señor Governador y media ora que duró la publicacion del vando del perdon general que se voceó en las quatro esquinas de dicha plaza estubo Leon incado de rodillas a los pies de dicho Señor Arriaga[[131]](#footnote-131).

El interés por este pasaje del presbítero no se enmarca en su precisión, comprometida por el tiempo y la intención de la súplica, sino por la imagen que representan, tanto ésta como el testimonio de Arriaga, de un Juan Francisco León arrodillado ante la autoridad real que transmite el perdón del monarca, la cual es una imagen que recuerda la narración pictórica de *la recuperación de Bahía de Todos los Santos* del pastranense Juan Bautista Maíno, realizada entre 1634 y 1635. En la escena se presenta a don Fadrique de Toledo al lado de un retrato de Felipe IV coronado por Minerva, diosa de la guerra, y su valido el conde-duque de Olivares. Postrada, la guarnición holandesa solicita el perdón, pero no es don Fadrique quien lo otorga, es el rey, quien por boca del Capitán General, brinda su misericordia a los vencidos.

Ilustración . Juan Bautista Maíno. *La Recuperación de Bahía de Todos los Santos* (detalle).



Museo del Prado, Madrid. Consultado el 26 de noviembre de 2016. https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-recuperacion-de-bahia-de-todos-los-santos/6097f5ec-0faa-46b4-bee6-aa48043ab2c1

Para elaborar esta escena Maíno se inspiró entre otros en Lope de Vega y su obra “El Brasil restituido”, específicamente en el siguiente pasaje:

Mas porque conozco el pecho

de aquel divino Monarca,

que cuanto es juez severo

sabrá ser padre piadoso

reconociendo su imperio,

desde aquí le quiero hablar,

y porque en mi tienda tengo su retrato, mientras le hablo

pon la rodilla en el suelo.

Descúbrese el retrato de S. M. Felipe IV, que Dios guarde, amén.

Magno Felipe, esta gente

pide perdón de sus yerros:

¿quiere Vuestra Majestad

que esta vez los perdonemos?

Parece que dijo sí.

Arriaga no presentó el retrato de Fernando VI, pero a través de su persona y de la facultad de la cual está embestido transmite la piedad del monarca hasta estos vasallos, encabezados por el mentado León. Tal forma de recibir el perdón en el que los sublevados demuestran su arrepentimiento y sumisión hincados de rodillas sólo se verá nuevamente en la rebelión de Quito de 1765 (al igual que la procesión por la ciudad), lo cual podría indicar una entrada en desuso del elemento ritual asociado a la petición y concesión del perdón[[132]](#footnote-132).

La actitud moderada de Arriaga fue de hecho recomendada por una cédula reservada que le concedía absoluta facultad para usar “á vuestro arbitrio y segun los casos y accidentes de la providencia suaves del perdon e indulto, ó de las de la justicia, ó las de las armas segun combenga”, añadiendo que cualquier decisión que tomase sería bien vista por el rey “aunque os excedais de los que prescriben las leyes, ó os altereis en el uso y orden de los tramites y reglas con que hán de instruirse los procesos”[[133]](#footnote-133), básicamente confiando en la prudencia de la persona del futuro gobernador. Adjunta a esa cédula reservada se enviaba desde la corte la prevención de que se usaran de preferencia “los medios mas suaves o menos biolentos que puedan adaptarse ó disponerse” teniendo en cuenta que con la cédula antedicha se le daba al gobernador la absoluta y amplia facultad de castigar, indultar o disimular; dejando a arbitrio de Arriaga si podía dejar libres a Juan Francisco León y sus colaboradores[[134]](#footnote-134).

Esto no implicó que Arriaga simplemente llegara con la rama de olivo, la ofreció porque pudo imponer las condiciones de la rendición de León y sus seguidores. De hecho hizo manifiesta su jurisdicción al comunicar un bando por el cual se amenazaba con castigar a muerte a aquellos que difundieran rumores como el difundido sobre la falsa rebelión de esclavos[[135]](#footnote-135). También, el primero de enero de 1750, puso un ultimátum a León para que disolviera la sublevación y todos los participantes fuesen a sus casas en menos de 24 horas, en caso contrario simplemente declararía sin efecto el perdón y se actuaría contra ellos “por todos los terminos de justicia y rigor de las armas”[[136]](#footnote-136), como efectivamente cumplieron[[137]](#footnote-137).

Tras conceder estos perdones Arriaga comunicó a la corte que estos indultos recaían sobre el “poblacho”, pero que dejaban el campo abierto para investigar a la nobleza, de la cual sospechaba estaba tras el complot para eliminar la compañía[[138]](#footnote-138). Esta misma idea se la planteó al marqués de la Ensenada manifestándole que “Dicen todos que la falta de presente castigo deja esto en posesion de nuebos alborotos, y es en parte assi, pero quitado el velo al maldito sobreescripto de causa comun, no tan facilmente se unira otra semejante oposicion”, dejando claro que su mayor sospecha era que el interés de la protesta radicaba en fomentar el ilícito comercio, pero recomendaba esperar a que se calmasen los ánimos antes de emprender cualquier castigo con el fin de evitar que se encendieran “un fuego comun”[[139]](#footnote-139). Finalmente, el rey aprobó los “medios de suavidad” utilizados por el gobernador y estuvo de acuerdo con suspender las averiguaciones criminales sobre los sospechosos[[140]](#footnote-140).

A pesar de la aparente pacificación de la provincia y de la aprobación de las medidas de clemencia por parte del rey, el marqués de la Ensenada consideraba que era necesario aplicar mayor rigor respecto a los participantes de la sublevación. Aunque algunos de sus consejeros le recomendaban continuar las medidas de suavidad, tres voces específicas promovieron el uso del rigor para sofocar de raíz la posible insurrección que se daría al reinstituir la compañía Guipuzcoana a la normalidad. Por un lado estaba quien fue gobernador de Venezuela entre 1737 y 1743, Gabriel Zuloaga, quien sentía evidente aversión frente a los isleños, además de haber sido uno de los principales promotores de la separación jurisdiccional de las provincias Caraqueñas del virreinato del Nuevo Reino. Por otra parte estaba Sebastián de Eslava, quien consideraba que era necesaria una muestra de la fuerza del rey en Caracas y consideraba, muy a tono con el gobernador Arriaga, que la élite caraqueña debía ser castigada. Finalmente el consejero Antonio José Álvarez y Abreo, marqués de la Regalía, uno de los más doctos consejeros de la península, era de la idea que ninguna insurrección en la historia había sido sofocada por medio de la suavidad[[141]](#footnote-141).

El marqués de la Ensenada ordena reemplazar al moderado Arriaga con el gobernador Felipe Ricardos, quien reinició las averiguaciones contra los participantes de la rebelión (incluido el presbítero Martínez de Porras mencionado previamente) afirmando que manejaba en este sentido una política de equilibrio entre rigor y la piedad:

Hé tenido por combeneinte mi conducta de juntar el rigor con la equidad y el respeto con la suavidad, porque el tono absoluto y prolixo de lo primero dava margen para que faltasen carzeles á los delincuentes y papel en que procesar hasta los más remotos yndiciados, y el segundo haria yluzoria á a Real voluntad, y en cuios extremos, la proporcion mas ajuztada me inclino á un medio, en cuio metodo espero lograr caval ejecucion de mis encargos, con entero restablezimiento y firme seguridad de la compañía[[142]](#footnote-142).

Este sentido del gobierno que equilibra el rigor y la suavidad, de cierta manera invierte el sentido del ofrecimiento preferente del perdón para comprender que en primer lugar se debería demostrar la fuerza y luego, ya rendidos y sometidos los desleales, ofrecer la mano misericordiosa del monarca. También en este tipo de estrategia se determinaba que para evitar el uso imprudente del rigor, se debía aplicar solamente en los cabecillas de la rebelión, aunque en este caso se conmutó la pena de muerte a Juan Francisco León, su hijo Nicolás, entre otros, quienes se entregaron al gobernador y clamaron por la piedad, por lo cual se remitieron a la península para que se definieran sus destinos[[143]](#footnote-143). En cambio, la totalidad del rigor fue aplicada a José Morillo, fusilado sumariamente tras su captura, así como al mulato Juan “Muchingo”, el zambo Raimundo Romero y el canario Andrés Rodríguez Betancourt, los dos primeros ahorcados y decapitados, en tanto el tercero arcabuceado en la plaza pública de Caracas. Días después ordenó ahorcar a Francisco Rodríguez Lemus, alias el Charrero, José Antonio Figueira y José Ignacio Gil, alias Manzaneda.

El gobernador Ricardos informó a Ensenada que usó también de la suavidad, representada en haber liberado a algunos presos en recompensa por servicios o donaciones recibidas durante la persecución de León; también con Pedro Blanco de Ponte, a quien liberó en fiado y de quien dice que se había comportado tan bien que incluso pensaba en otorgarle la libertad completa. Justificaba estos medios de suavidad por ser una buena estrategia para atraer la confianza de los principales de la ciudad, algunos de los cuales incluso se habían acercado a él para pedir la certificación de su actuación y con ello solicitar algunas gracias al monarca[[144]](#footnote-144). La respuesta del rey a estas medidas de Ricardos sería la de que se cesaran los procesos y dependiendo de la culpabilidad de los reos se les perdonara, conmutara la pena o se desterrase de la provincia “y no se hable mas del asumpto”[[145]](#footnote-145).

Para mayo de 1753 Juan Francisco León y Matías Ovalle habían fallecido en la cárcel de Cádiz, quedaban presos Gaspar y José Lorenzo de Córdoba, Pablo Cazorla[[146]](#footnote-146), Nicolás de León y Francisco de León, estos últimos hijos de Juan Francisco. En consulta a la sala de justicia del Consejo de Indias consideraron que todos los mencionados eran culpables de delito de lesa majestad en segundo grado, castigado con la pena capital, sin embargo “la piedad de Su Majestad se há querido señalar con una tan alta indulgencia” que conmutó la condena de muerte a todos ellos para enviarlos a Orán y Ceuta con el fin que sirviesen a los regimientos del rey en esos presidios[[147]](#footnote-147).

Las acciones "equilibradas" de Ricardos constituyeron el colofón de la rebelión de León, la cual tuvo un importante impacto en la relación de la compañía guipuzcoana con la provincia. No debe pasarse por alto que esta sería una de las rebeliones que representarían los patriotas caraqueños durante la revolución de independencia para reconstruir la memoria y demostrar las iniquidades de la corona española en sus provincias[[148]](#footnote-148). En particular, la desconfianza del perdón, ratificado por el rey pero revocado de facto por su ministro. También es de destacar la independencia completa del gobernador y capitán general de Caracas en estas acciones, como juez, gobernador y militar, abrigado de plenas facultades para el rigor o el perdón según su arbitrio, aunque tal autoridad estuviese mediada en buen término por la cédula y ordenes reservadas a Arriaga o las instrucciones dadas a Ricardos por el marqués de la Ensenada. A pesar de todo, el "rey prudente" hizo honor a su título y permitió que los asuntos de Caracas fueran resueltos en el campo por oficiales españoles, con una importante desconfianza de los principales de Caracas e incluso cierta comprensión ante los posibles excesos de la compañía.

Ocho años más tarde, Nicolás de León, hijo del líder rebelde, demostraría su servicio a la corona desde el presidio de Orán y solicitaría el indulto, contando con la mediación del comandante del regimiento fijo de esa plaza y de Ricardo Wall, ministro de Estado y de la Guerra, quien a su vez acudió a Julián de Arriaga, ahora en la posición de secretario del despacho universal de indias, para elevar su petición al rey, quien finalmente acepta que León pasara de servir como presidiario a voluntario[[149]](#footnote-149) donde esperaba obtener el perdón completo al servir en Cantabria durante la guerra de los siete años, que lastimosamente para León llegó a su fin antes que pudiera entrar en combate[[150]](#footnote-150), por lo cual tuvo que impetrar indulto completo cinco años después (tiempo que había sido marcado como el de servicio antes de otorgársele libertad) que no tuvo curso[[151]](#footnote-151). Finalmente, tras una década de servicio, se le concede licencia para ir con su esposa e hijos a Caracas[[152]](#footnote-152) después de haber ofrecido el cultivar de cacao el valle del Guapo, que según León estaba dominado por indios "bravos" después del destierro de su padre y sus hermanos[[153]](#footnote-153). De esta manera, después de 24 años de ocurrida la rebelión, Nicolás de León pudo restituirse a la gracia del monarca bajo la promesa de retornar al servicio del rey bajo las condiciones originales de la concesión dada a su familia antes de la rebelión: producir, poblar y proteger una parte de los dominios de Indias para su majestad.

## Perdón y restitución

En sentido estricto indultar significa el retiro o minoración graciosa de la pena que fue impuesta por sentencia firme[[154]](#footnote-154). En la “controversia XXI” de su *Tractatus de re criminali*, el valenciano Matheu i Sanz definía el indulto o *indulgentia* de la siguiente manera:

Indulgentia itaque est condonatio gratiosa facta per Principem reo alicujus criminis pœnam liberaliter condonando, & in pristinum statum restituendo de qua[[155]](#footnote-155).

Como lo indicó en su momento María Inmaculada Rodríguez, esta definición sintetiza los “caracteres esenciales del perdón”[[156]](#footnote-156). La indulgencia es la gracia real por la cual el Príncipe libera de la pena al reo y lo restituye a su *pristinum statum*, esto es, al estado que estaba antes de haber sido enjuiciado o de haber cometido el delito. La *restitutio* no debe ser tomada a la ligera ya que forma parte sustantiva de la *œconomia* de la gracia[[157]](#footnote-157): *restitutio est in pristinum statum repositio*, decretó Gregorio IX en *De restitutione in integrum*[[158]](#footnote-158). Como se conoce hoy por la sincrética doctrina del “derecho romano”, la *restitutio in integrum* (Dig. 4, 1, 0) consiste en la devolución a la posición legal previa[[159]](#footnote-159) o mejor al “primer estado”, que de hecho comprende “todos los aspectos posibles de la restitución”[[160]](#footnote-160). Sin embargo, estamos tratando aquí con un concepto fundamental para la regulación de la economía-moral[[161]](#footnote-161): la absolución del pecado estaba condicionada a la “restitución completa” del bien o la reputación de su prójimo[[162]](#footnote-162).

¿Por qué ha de restituir el príncipe al condenado a su estado original? El perdón real era una demostración del poder magnificente del príncipe, sustentado en el sentido gracioso y virtuoso de la clemencia real, que tenía como propósito reestablecer la equidad entre sus vasallos mediante el ejercicio de la benevolencia y liberalidad hacia los súbditos, con lo cual lograba además reforzar la lealtad y el amor de los vasallos para su príncipe. La *restitutio*, en este sentido, retorna al estado original antes de la perturbación de la *aequitas[[163]](#footnote-163),* por lo cual el perdón estará condicionado a que esta condición sea posible: que no se afecte a tercero, que cuente con el perdón de la parte ofendida o que se restituya el bien a la persona o a la Real Hacienda. En todo caso, estamos hablando de una forma de perdón específica que permite tal *restitutio* gratuita, pero en otros casos estuvo condicionada a la confiscación de bienes, al servicio de las armas, entre otras “retribuciones” a la Corona. Siguiendo a García Mastrillo, *Restitutio denotat Indulgentia plenaria*:

Item dicitur restitutio, eaque plenariam denotat restitutionem, […] eam diffiniendo ait esse in pristinum statum respositionem, nulla alia de causa concessam, quam ex mera Principis gratia, & humanitate[[164]](#footnote-164).

Es una forma de *Indulgentia*, manifestación de la magnificencia y munificencia del *Princeps* pero que no proviene de justicia sino de gracia, como continúa Mastrillo:

& ex hoc differt à resto ne Iustitiæ, sique dem illa concedit, qua ita ius statuit concedendam, hæc autem indulgent a Principe, non quod aliqua iusta causa, quæ lege caveatur pro iustitia, & de iure cogat, sed quia ita humanitas eius, & gratia, & liberalitas compellit[[165]](#footnote-165).

Por su parte Juan López de Cuéllar lo explicó de una manera mucho más clara:

La restitución es prioris status, vel iuris redintegratio[[166]](#footnote-166) […] La cual solo el Principe la concede […]. Puede obtenerse de dos modos, ó por via de gracia, y esta únicamente depende de la voluntad del Principe. O por via de Iusticia […] Cuyo fundamento es hazer evidente la inocencia del delinquente, mostrando que la acusación fue calumniosa, y la sentencia que en él se executó injusta. […] O porque los que pronunciaron la sentencia, no tuvieron libertad para votar, por ser violentados de suprema auctoridad, á cuya fuerça, no se pudieron resistir. […] O mandato precisso, y voluntad absoluta de algún Soberano […] Que uno, y otro induzen justo miedo. […] Y la razon es, porque no solo los mandatos, sino los ruegos de los Superiores, Sunt admodum terribilia. Y se equivocan con la violencia.

En Cuéllar las formas de restitución de la equidad son claras: por vía de gracia, impulsada por la liberalidad y munificencia del Rey, o por vía de justicia, cuando se demostraba que la sentencia era injusta; en ambos casos el resultado era el mismo: la reintegración al estado previo. Esta facultad del Príncipe para otorgar por su libre voluntad el perdón y retorno al estado original se hará manifiesto en los perdones particulares otorgados por su gracia y en los momentos de turbulencia, cuando después del castigo sea necesario recuperar el estado de calma y tranquilidad previas a la exaltación de los ánimos.

La *restitutio* conllevaba en principio la posibilidad de revocar las sentencias injustas, la restauración de la *aequitas*. Un ejemplo de esto puede encontrarse en el reclamo que realizó Fray Tomás de Almanza, de la orden de San Agustín de Calzados, por una sentencia del juzgado de bienes de difuntos que negó la donación de la herencia materna al convento en el cual se encontraba recluido, en la cual cita ciertos apartes de doctrina pertinentes al caso[[167]](#footnote-167):

Seraphin. Decis. 251. Part. 1. N. 2. “Iniustitia licet non notoria est sufficiens causa restitutionis in integrum” -> “Tamen in hoc convenerunt omnes, hanc sententiam revocari debere ex capite restitutionis, cum injustitia licèt non notoria sit sufficiés causa restitutionis. Nec obstare, quod sententia contra ius litigatoris valeat, quia nihilominus competit denunciato cuangelica grauato.”

Mantica decis 315 n 7. “Neque etiam dbium est, quin maior 25. annis ex iusta causa possit ad audientiam restitui adversus rem iudicatam, Abb. in d. conse. 77. col. 3. Versicul. aut subest legitima causa, lib. 2. Et Domini in casu propósito ex deductis putabant iustam causam subesse, præsertim quia ad obtinendam in integrum restitutionem adversus rem iudicatam, qualiscunque iniustitia sufficit, etiam si non sit notoria, ut fuit resolutum coram Reverendiss P. D. Decano in Auximana dotis die 14 Martii 1576 quam etiam dec.sequitur Rota coram Cæs. de Grass. dec. 10 num 12 de sent. & re iud.”

### ¿Perdón sin culpa? El indulto impetrado por Don Pedro Velázquez entre 1746 y 1760 por los cargos que pudieran resultar del tiempo que gobernó la provincia de Girón.

Esta somera reflexión en torno a la *restitutio* y el indulto era necesaria para poder abordar el caso particular de Don Pedro Velázquez, vecino de la ciudad de San Juan Girón en la cual cumplió con los cargos de Gobernador y Alcalde Ordinario, quien se quejaba ante el virrey Sebastián de Eslava por haber tenido que salir dicha ciudad en 1746 para radicarse en Santafé debido a la persecución a la que fue sometido por el entonces gobernador don Agustín Gutiérrez de los Ríos quien lo había desterrado de la ciudad y le impedía resolver algunos negocios que tenía pendientes en esa jurisdicción. El destierro de Velásquez había sido concedido por el virrey, según él, gracias a información falsa y engañosa.

Velásquez alegaba que al intentar regresar a Girón a resolver sus negocios Gutiérrez lo hizo comparecer al cabildo en donde le comunicó públicamente que estaba desterrado de la provincia, además de otras imputaciones que el antiguo gobernador no precisa. Al haber "perdido su honor" por esta actuación el mencionado Velásquez solicitó le fuese restituido por la piedad del virrey:

espero de la christiandad de V. E. depondrá el herrado juizio que contra mis prosederes hubiese formado sino bastase para ello los // ynstrumentos que llevo presentado, y que en virtud se me restituiga por la justificacion de V. E. al honor que sin ser oydo he perdido, el que espero recuperar por tal piedad como la de un Príncipe tan Beningno como V. E[[168]](#footnote-168).

Velásquez realiza una solicitud de *restitutio laesae famae*[[169]](#footnote-169), sustentada en el juicio errado llevado en su contra sin seguir el principio del derecho, la cual realiza ante el virrey porque este tenía la facultad otorgada por el monarca para actuar tal como él lo haría en tales situaciones[[170]](#footnote-170). Eslava no realizaría la restitución de Velásquez, aunque le concedió licencia para que pudiera “transar, cobrar y componer sus dependencias” en la provincia de Girón[[171]](#footnote-171). Esta forma de restitución comprende una mayor complejidad que la *restitutio in integrum*, la cual, sintéticamente, comprendía el retornar aquello que se había hurtado, estafado, cobrado de más, obtenido por argucias o de otras maneras[[172]](#footnote-172). La dificultad proviene de la cuestión ¿cómo restituir y cómo se sabe restituida la injuria? Para los tratadistas la *laesa famae* incluía el daño hecho contra la persona, por ejemplo, una herida que causara la pérdida de un brazo o afrentas contra el honor personal y familiar (la deshonra por haber tomado la virginidad de una hija era un lugar común en estos juicios de restitución[[173]](#footnote-173)).

El proceso parecía quedaría en ese estado para Velásquez, incluso le fue otorgada la gobernación de Girón por orden del virrey José Alonso Pizarro en remplazo de don Francisco de Ibero en el año de 1751[[174]](#footnote-174). No cabe duda que durante su gobierno Velásquez se hizo de la animadversión de algunos vecinos poderosos de la provincia pues en 1760 acudió nuevamente a la Real Audiencia para reclamar por la imposibilidad de ingresar a la jurisdicción de Girón a resolver sus negocios, pero en busca la restitución graciosa que perdone los delitos “como si en realidad” los hubiese cometido y se le restituyera al estado original, algo inusual en las solicitudes de indulto. El exgobernador se quejaba ante el virrey de la persecución a la que era sometido a pesar de los muchos años de servicio en la ciudad de San Juan Girón. Decía que “como esta ocupacion por mas que se exercite con pureza, y desiterés, siempre trae malquerientes, me refutaron en tanto grado que sus persecuciones, embidias, acusaciones, é informes, me hizieron gastar muchos pesos en mi defensa, en la que siempre obtuve faborablemente consiguiendo acceptacion, buena confianza, y reputacion en los superiores”. Afirmaba que a solicitudes como la presentada previamente lograban acallar temporalmente la persecución, pero finalmente se le juzgó por defraudador de la Real Hacienda al inculpársele de haber negociado con cacao y tabaco de manera subrepticia, lo cual, según él, se habría sustentado en acusaciones e informes injustificados de algunos sujetos que no identifica.

La solicitud fue la siguiente:

con todo esto para el maior seguro de mi conciencia, honor, y bienes, y que ninguna acusación en lo futuro me dañe y perjudique, hallandose en V. E. la Superior Facultad de el indulto y perdon, ocurro á esta para que usando de ella en mi beneficio se sirva aplicarmela y como si en la realidad fuese yo perjudicador de la Real hazienda huviera tenido malversacion de ella, y manejo, defraudandola en alcabalas, derechos de Puertos que se pagan en aquella jurisdiccion, ó cometido otros semejantes delitos (á excepcion de contravandista, y tratar ilicitamente en mercadurías de mala entrada, ó como enemigos de la Corona, pues en esto no me he mesclado)[[175]](#footnote-175)

Vale la pena resaltar el conocimiento del gobernador de la lógica jurídica del indulto en un contexto virreinal. Apela a la facultad concedida a los virreyes para perdonar delitos e incluso añade más adelante la solicitud para que sea añadido al perdón la cédula que comprobaría que el virrey Solís gozaba de esta facultad acorde con las leyes municipales o de Indias[[176]](#footnote-176). También apela al hecho que un delito perdonado se consideraba causa juzgada, por lo tanto, perdonar un delito cometido, así fuese de manera supuesta, en los términos de su gobierno, implicaba liberarse de una vez por todas de las acusaciones que pudieran seguir por otros jueces, y por esta misma razón aclara que cualquier juez, gobernador o alcalde se viera impedido de actuar en su contra pues los delitos ya habrían sido perdonados[[177]](#footnote-177). Posteriormente, describe cuáles son los delitos por los cuales puede acogerse al indulto y por cuáles se vería excluido (contrabando, comercio ilícito con enemigos de la Corona), los cuáles excluye de su actuación hipotética. Finalmente, como muestra de su lealtad y real servicio, ofrece un donativo a la Real Hacienda: “por servir á S. M. como su leal vasallo, exhibiré en estas Reales cajas dos mil patacones”. Esta oferta no debería considerarse como cohecho o baratería toda vez que es una manifestación voluntaria de agradecimiento ante la munificencia del virrey quien ejercía las funciones clementes del soberano en el Reino de Nueva Granada[[178]](#footnote-178).

La respuesta del Real Acuerdo fue positiva ante la solicitud del exgobernador, aunque aclarando que su comportamiento siempre había sido celoso con el real servicio y que no recaía sobre él perdón por algún delito pues no tenía ninguno, en cambio se le otorgaba con el propósito de dar consuelo ante las posibles acusaciones de sus émulos. Así, se decidió:

se le consede él referido yndulto para que ahora, ni nunca, no en este, ni en otro qualquiera Tribunal ó Juzgado pueda ser inquietado, prosesado, ni demandado por qualquiera delito, ó culpa que se le figure, ó pueda haver tenido en los empleos que já exercido de fraude, o usurpacion, u omicion // de Real Hazienda, ó que qualquiera ótro de los que en virtuda de las Reales facultades consedidas á este Superior Govierno puede ser condonado, ó perdonado y constando haver introducido en estas Reales Caxas los referidos dos mill pesos, se le libre su Despacho de éste yndulto como lo pide, y en la forma ordinaria[[179]](#footnote-179).

Dos días después de esta decisión la Real Caja certificó el donativo de dos mil pesos y se libró el despacho de indulto.

Este expediente comprende una oportunidad para ahondar en los vericuetos del perdón en Indias, del cual se desprende que un indulto particular estaba ligado específicamente a la misma calidad de la persona, su honra y la posibilidad de recibir una merced. Finalmente, no debe olvidarse que en la justicia castellana el indulto era, antes que nada, un privilegio.

# ANEXOS

Anexo . Perdón general del virrey Sebastián de Eslava a los soldados de Cartagena.

*Perdon General y Causion Juratoria*

En la ciudad de Cartagena de yndias en 7 días del mes de Abril de 1745.

El Señor Doctor Don Sevastian Carlos Pretel Presbítero Abogado de la Real Audiencia de este Reyno, Protonotario Apostólico, Dean, dignidad de esta Santa Yglesia Catedral, Provisor y Vicario General de esta ciudad, y Governador de todo su obispados, por el Ylustrisimo Señor Obispo de el, estando en esta Santa dicha Yglesia, á donde concurrió, con el Santísimo Sacramento que en procesion solemne salio desde ella para la Puerta de San Antonio de la media Luna, donde se hallava la tropa de los Batallones de esta plaza, el excelentisimo Señor Don Sevastián de Eslava, Cavallero de la orden de Santiago, Commendador de Puente del Emperador en la de Calatrava, Señor del lugar de Eguillort, Capitan general de los Reales Ejercitos, Virrey Governador y Capitan General de este Nuevo Reyno de Granada, el de tierra firme y provincias agregadas, Presidente de la Real Audiencia, y Chancillería de la Ciudad de Santa Feé por el Rey nuestro Señor; el Señor Mariscal de Campo de los Reales Ejercitos Don Basilio de Gante, Governador y Comandante General de esta plaza, y Comandante del Batallón de ella; el señor Coronel de los Reales ejercitos Don Pedro Casellas Comandante del 2° Batallon de Aragon; el Señor Capitan de los Reales ejercitos Don Fernando Caxigal Comandante del 2° Batallón de España; con el Señor Capitan de Marina Don Francisco Garay Comandante de la tropa de Marina, todos de la guarnicion de esta plaza, y en presencia de los ilustrisimos señores ynquisidores Apostolicos; señor del venerables Dean y Cabildo, y RR PP Prelados de las religiones de esta ciudad, y el mui ylustre Cabildo, Justicia y Regimiento de ella, á quienes doi feé conozco que estan combocados por la tropa sublevada para la solemnidad del Juramento y Perdon, que en nombre de Su Majestad que Dios Guarde, ympetran los yndividuos de ella, juraron por Dios Nuestro Señor, en precensia del Santísimo Señor Sacramentado, por los sagrados evangelios, que en nombre del REY nuestro Señor perdonavan, y desde luego perdonaron á todos y á cada uno de por sí, de los que han concurrido á la presente sublevacion, y en su consecuencia prometieron no castigar ni penar directa ni yndirectamente, de palabra ni de obra, a ninguno de ellos, ni formar proceso contra alguno de los comprehendidos, ni contra todos por este delicto, ni por otros, de los que hasta el presente ubiesen cometido por estar como estan amparado de la ymmunidad eclesiástica y auctoridad regia, á que se ácojieron, y que en qualquiera tiempo que por los referidos delictos se les pretenda ymponer alguna pena, se obligaron S[u] E[xcelencia] y los demas señores otorgantes, á defenderlos, y á cumplir ymbiolablemente con lo aqui jurado, vajo las penas y apercevimientos en que yncurren los que lo quebrantan, con el poderío, sumisión, y renunciacion necesaria, y dijeron que para resguardo de dicha tropa, se de á cada uno de sus yndividuos textimonio de esta causion juratoria, en cuia verdad, assi lo dijeron, otorgaron y firmaron dicho Excelentisimo Señor y los demas señores otorgantes, con su señoria el señor Governador del obispado, señores ilustrisimos ynquisidores y señores del venerable Dean y Cabildo con los RR PP Prelados, siendo testigos dichos señores del mui ylustre Cabildo y demas señores oficiales subalternos, que se hallaron presentes de todo lo qual doi feé.

Don Sevastián de Eslava

Doctor Don Sebastian Carlos Pretel

Don Basilio de Gante

Don Melchor de Navarrete

Pedro Casellas

Don Francisco de Garay

Fernando de Caxigal

Don Francisco Antonio de Ylardui

Doctor Don Francisco Cayetano de Meridiguren

Doctor Don Lucas Bonilla portillo

Doctor Don Pedro de Bibanco

Doctor Don Bartholomé Narvaes

Doctor Don Simon Chacon

Fray Remigio Altemirano, Prior y Vicario general provincial

Fray Juan Hidalgo, guardian de San Francisco

Fray Joseph Albarado, Prior de San Agustin

Fray Silvestre Cañete

Geronimo Luis de Bigrosi

Fray Pedro Antonio de San Miguel, Prior y vicario provincial de la Popa

Fray Joseph Joachim Gonzalez, Prior de San Juan de Dios

Antemí Don Matheo Carraquilla Escrivano y Notario maior.

Inserto en "Relación del levantamiento acaecido en Cartagena de las Indias, dia 2 de Abril de 1745, de la tropa de su guarnición compuesta de los batallones 2° de España, 2° de Aragón, fijo de la plaza y piquetes, y en la referida ocasion 160 hombres de Marina." Cartagena, 7 de abril de 1745. AGI, Santa Fe, 940.

Anexo . Representación de la tropa levantada en Panamá en 1766

*Representación*

Señor Governador y Comandante General. Los soldados del regimiento de la Reyna, artilleros y piquetes de este presidio, presentes enfermos y en nombre de los ausentes con la mas sumisa veneracion representan a V[uestra] S[eñoría] que haviendo experimentado que con los ocho pesos mensuales de sueldo que gozan, es moralmente imposible (a tiro largo) mantener la vida humana en esta ciudad ni en la de Portovelo, Fuerte de Chagres y demas puestos donde han de servir. Ocurren a V[uestra] S[eñoría] solicitando se sirva mandar se les acuda con el Prest de trece pesos a los demas que han gozado anteriormente desde el dia que nos desembarcamos en portovelo los que hemos venido de España, y completandoles a los que aqui existian su haver del presente mesa bajo de los descuentos acostumbrados de hospitalidad, entierro y luces para alumbrar los quarteles en que hemos de avitar alojados; pero no el de vestuario por lo perteneciente a los de la Reyna y Artilleros, porque con el que tenemos costeado nos conservaremos tres años, y los Piquetes que han de marchar con destino al Departamento de Quito lo costearan ellos mismos con mas comodidad quando lleguen de su destino que asi tiene lugar por los fundamentos siguientes:

En la ysla de la Havana estamos ynformados se ha establecido el sueldo de los ocho pesos, pero tambien estamos de que se dá a la tropa el Pan de Municion y es notoria la fertilidad, abundancia y precios equitatibos de aquel Pais que no puede parificarse [sic] con este save todo el Mundo lo caro y esteril deel y que abastese todo de fuera: mas con todo si llegara el caso de que se les diese sobre los ocho pesos el pan como en la Havana no puede esconderse seria de maior costo á S[u] M[ajestad] (que Dios guarde) que el continuarnos el Prest que pretendemos.

No se nos oculta (Señor) lo que V[uestra] S[eñoría] se há esforzado anticipando viveres a Portovelo, Cruzes y Chagre a fin de que a nuestro arribo no careciesemos del sustento necesario distribuyendo sus acertadas providencias para que nada faltase a la llegada a esta plaza, costeando V[uestra] S[eñoría] de su peculio la comida del primer dia que estubo al paladar adaptable por lo bien sasonado de que tributamos con nuestra explicacion las mas devidas gracias; mas en los dias subcesivos que hemos continuado arranchados careciendo de los alimentos de la substancia que tienen en España y faltando el calor natural (por el temperamento) en los estomagos para dixerir las bastas viandas del patrio suelo, resulta que mal guizado el arros (porque se queda como engrudo) há causado la fatal pestilencia que experimenta la tropa que al presente adolece en el Hospital.

La franquicia de los trece pesos que pedimos la exforsamos contener la maior parte de la tropa cumplido el termino de su enganchamiento y no por esto solicitamos nuevo premio, ni lisencias porque confesamos el crecido costo que ha tenido S[u] M[ajestad] en transportarnos a esta America, mas si fuere posible el que se nos concediese dichas licencias para apartarnos del servicio nos aplicariamos a cultibar la tierra y alcanzariamos con mas ventajas el preciso alimento a que aspiramos, bien que no nos ceparariamos a sacrificar siempre nuestras vidas en defensa de Nuestro Catholico Monarca hasta derramar la ultima gota de sangre de nuestras venas como se acreditará con la experiencia.

Tambien esperamos que V[uestra] S[eñoría] se sirva dar las mas combenientes disposiciones para que no se nos oprima enserrandonos desde la media tarde en los quarteles, porque con esta demostracion nos melancolisamos mas y mas despues de la tristesa que nos asiste con la dolorosa estacion de la marcha desde España a las Yndias.

Ymediatamente a que mucha parte de la tropa por sus costumbre y vida arreglada, no nececitan de arrancharse para distribuir con prudencia su Prest en lo preciso e indispensable, no dudan se nos conceda el que no se obligue a tal arranchamiento, pues a los que fueren desordenados en sus procederes se les sugetará por sus respectivos sargentos y cavos.

No podemos dexar de hacer presente a V[uestra] S[eñoría] que lo executado se ha hecho sin refleccion a lo que previenen las Reales ordenanzas y dimana de lo que experimentamos los del cuerpo del Regimiento de la Reyna, conociendo el poco amor con que se nos trata por los gefes y oficiales de el, castigandonos con azotes como a niños ó viles esclavos y asi, suplicamos a V[uestra] S[eñoría] como a nuestro ynspector generral no lo permita y providenciar se nos trate como soldados y leales vasallos que estamos prontos a sacrificarnos en servicio de S[u] M[ajestad] y mas quando aqui nunca se há practicado, ni en ninguna parte de la America se executa V[uestra] S[eñoría] concidere piadosamente sobre el asunto y si hemos dado el menor motibo de queja en el corto tiempo que hemos estado en este Pais para que se nos sonrroje con semejante castigo.

Ultimamente por el exceso cometido compulsos de la oprecion experimentada y extrema necesidad que padeciamos esperamos se nos conceda el perdon que pedimos, bajo del seguro de yglecia y precedido el juramento correspondiente que deverrá hacer V[uestra] S[eñoría] sobre los quatro Evangelios (con asistencia del Ylustrisimo Señor Obispo de esta Diocesis, el Señor Theniente de Rey y señores de los cavildos eclesiásticos y seculares y demas sugetos principales de esta ciudad) y de que se nos ha de cumplir nuestra solicitud y no se nos a de puncionar con el mas leve castigo por ser conforme a la piadosa real magnificencia de S[u] M[ajestad] C[atólica] y que de este memorial y su proveido se nos den las copias que pidieremos para nuestro resguardo y que quede uno archibado en la Santa Yglecia Cathedral, que asi es de Justicia y esperamos alcansar de su señoria. Y en estos terminos haviendo manifestado nuestra lealtad y deseo de la paz que havia interrumpido la necesidad expresada y no la deslealtad, estamos prontos a subordinar nuestra obediencia del mismo modo que antes, a entregar la plaza, las llaves y almagazenes y a marchar desde la yglecia con nuestros oficiales a nuestros quarteles y puestos en servicio del Rey, defensa de la plaza y a quedar en la devida obediencia suplicando a VS el que nos recomiende a dichos oficiales para que enteramente se olviden del sentimiento que puede haver causado el movimiento hecho para que nos traten con la mejor equidad, imponiendose en la materia perpetuo silencio. Panama y Septiembre Veinteycinco de mil Setecientos sesenta y seis.

En nombre del Regimiento de la Reyna y demas Guarnicion de esta Plaza, firmamos los sujetos nombrados para este Govierno del tiempo en que se nos subordinaron para que promoviesemos su alivio y socorro.

Leopoldo Edren

Antonio Belmonte

Joachim Figueroa

1. Este apartado no pretende necesariamente insertarse en el capítulo pero lo incluyo como un pequeño boceto de la introducción de la tesis como referencia para la lectura de este trabajo. [↑](#footnote-ref-1)
2. “Mero imperio es beneficio y entrega de la espada dada al poder sobre los criminales, incluso ser capaz de advertir la pena de muerte” Johann Lüder Albrecht, *Disputatio solemnis de mero imperio* (Leipzig: Officina Langenhemiana, 1751). [↑](#footnote-ref-2)
3. Adriano Prosperi, *Delitto e perdono. La pena di morte nell’orizzonte mentale dell’Europa cristiana. XIV-XVIII secolo*, Nueva edición revisada (Turín: Einaudi, 2016), 51. [↑](#footnote-ref-3)
4. “Actas del Serenísimo Colegio Constituyente y Electoral de la Provincia de Cundinamarca”, en *Actas de los colegios electorales y constituyentes de Cundinamarca y Antioquia, 1811-1812*, de Daniel Gutiérrez Ardila, vol. I, Colección Bicentenario 7 (Bogotá, Bucaramanga: Universidad Externado de Colombia, Universidad Industrial de Santander, 2010), 131. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bartolomé Clavero, *Happy constitution: cultura y lengua constitucionales*, Colección Estructuras y procesos (Madrid: Editorial Trotta, 1997), 53–54. [↑](#footnote-ref-5)
6. Isidro Vanegas Useche, *El constitucionalismo fundacional* (Bogotá: Ediciones Plural, 2012), 8. [↑](#footnote-ref-6)
7. Para este ejercicio me valí de la herramienta de visualización textual *Wordtree* fundamentado en el trabajo de Martin Wattenberg y Fernanda B. Viégas, “The Word Tree, an Interactive Visual Concordance”, *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* 14, núm. 6 (2008): 1221–28, doi:10.1109/TVCG.2008.172. El aplicativo fue programado por Jason Davies y se encuentra disponible en <https://www.jasondavies.com/wordtree/> [↑](#footnote-ref-7)
8. Título I, sección segunda, artículo 30, sobre la separación de poderes. *Constitución del Estado de Antioquia* (Santa Fe de Bogotá: imprenta de Bruno Espinosa por Nicomedes Lora, 1812). [↑](#footnote-ref-8)
9. Resolución del despacho del Interior y Relaciones Exteriores, agosto 29 de 1837, en *Gaceta de la Nueva Granada,* Bogotá, domingo 10 de septiembre de 1837, trimestre 23, número 313. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mímesis en el sentido de una inspiración y adaptación de tales experiencias con mayor o menor cuidado a las costumbres que se representaban como comunes a la nación colombiana. [↑](#footnote-ref-10)
11. Figuracional en el sentido de la sociología procesual desarrollada por Norbert Elias. [↑](#footnote-ref-11)
12. Antonio Muro Orejón, ed., *Cedulario Americano del siglo XVIII*, vol. II (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1969), 644–47 nota 1; Ainara Vázquez Varela, *“De la primera sangre de este reino”: las élites dirigentes de Santa Fe (1700-1750)*, 1. ed, Colección Textos de ciencias humanas (Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 2010), 26. [↑](#footnote-ref-12)
13. Eissa-Barros, Francisco A. “El ábate, el consejo y el virreinato: la política cortesana y la primera creación del virreinato de Nueva Granada (1717-1723)”. En *España y América en el Bicentenario de las Independencias*, editado por Francisco Fernández Beltrán y Lucía Casajús, 293–314. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2012, p. 293. [↑](#footnote-ref-13)
14. “Cédula extinguiendo el empleo de virrey del Nuevo Reino de Granada y volviendo a poner su mando y gobierno en el presidente de la Audiencia con el título de Capitán General.” 5 de noviembre de 1723. En Antonio Muro Orejón, *Cedulario americano del siglo XVIII*, Sevilla: CESIC, 1969, pp. 644-647. [↑](#footnote-ref-14)
15. Como demuestra Ainara Vázquez, las relaciones familiares, de amistad y clientelismo que le permitieron a Eslava hacerse con el virreinato de Santa Fe no pudieron replicarse en Indias, de hecho, la corte de este virrey “no destacó especialmente como un centro de poder al cual las elites del virreinato pudieran acudir con objeto de obtener favores tendentes a prosperar en sus carreras”. Ainara Vázquez Varela, “Redes de patronazgo del virrey Sebastián de Eslava en Nuevo Reino de Granada”, *Príncipe de Viana* 72, núm. 254 (2011): 145. [↑](#footnote-ref-15)
16. A pesar de su aparente fracaso, Villalonga logró construir una importante red de clientela incorporando tanto sus seguidores a la facciones e instituciones de Santa Fe como vinculando santafereños a su propia red de mecenazgo. Ainara Vázquez Varela, “Jorge Villalonga’s Entourage: Political Networking and Administrative Reform in Santa Fe (1717-1723)”, en *Early Bourbon Spanish America: politics and society in a forgotten era (1700-1759)*, ed. Francisco A. Eissa-Barroso y Ainara Vázquez Varela, Early American History Series: the American Colonies, 1500-1830 1 (Leiden: Brill, 2013), 111–26. [↑](#footnote-ref-16)
17. Margarita Restrepo Olano, *Nueva Granada en tiempos del virrey Solís, 1753-1761* (Bogotá: Universidad del Rosario, 2009), 263. [↑](#footnote-ref-17)
18. Anthony McFarlane, *Colombia before Independence: Economy, Society, and Politics under Bourbon Rule*, Cambridge Latin American Studies 75 (New York: Cambridge University Press, 1993), 250. [↑](#footnote-ref-18)
19. Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, *Historia de Colombia para la enseñanza secundaria* (Bogotá: Librería Colombiana de Camacho Roldán y Tamayo, 1920), 192. [↑](#footnote-ref-19)
20. Una crónica de la campaña naval de Pizarro está relatada en Shirley Fish, *HMS Centurion 1733–1769 An Historic Biographical-Travelogue of One of Britain’s Most Famous Warships and the Capture of the Nuestra Senora De Covadonga Treasure Galleon.* (Bloomington, IN: AuthorHouse, 2015). [↑](#footnote-ref-20)
21. David Marley, *Wars of the Americas: A Chronology of Armed Conflict in the Western Hemisphere, 1492 to the Present*, 2a edición (Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO, 2008), 389. [↑](#footnote-ref-21)
22. Un ejemplo de esto fue el fracaso en la implementación del monopolio del tabaco en Cuba en 1717. Allan J. Kuethe y Kenneth J. Andrien, *The Spanish Atlantic World in the Eighteenth Century: War and the Bourbon Reforms, 1713–1796* (Cambridge University Press, 2014), 90–94; Javier Rodríguez Piña, *Cuba*, América Latina (México, Guadalajara: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Universidad de Guadalajara, Alianza Editorial Mexicana, 1988), 31–32. [↑](#footnote-ref-22)
23. Allan J. Kuethe, *Military reform and society in New Granada, 1773-1808*, A University of Florida Book 22 (Gainesville: Univ. Pr. of Florida, 1978), 7. [↑](#footnote-ref-23)
24. Leon G. Campbell, “Cambios en la estructura racial y administrativa en el Perú colonial a fines del siglo XVIII”, en *Soldados del Rey. El ejército borbónico en América colonial en vísperas de la independencia*, ed. Allan J. Kuethe y Juan Marchena Fernández (Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 2015), 237–38. En general, la política de Felipe V y su ministro Alberoni estuvo volcada hacia la recuperación de los dominios perdidos en Europa, por lo cual las medidas que se tomaron para el Caribe fueron insuficientes. Incluso se excluyó a la armada de Barlovento de la unificación de las flotas españolas en la creación de la Armada Real por Real Cédula de 14 de febrero de 1714. José Manuel Serrano Álvarez, *Fortificaciones y tropas: el gasto militar en tierra firme, 1700-1788* (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2004), 71. [↑](#footnote-ref-24)
25. Vázquez Varela, *De la primera sangre de este reino*; Vázquez Varela, “Redes de patronazgo del virrey Sebastián de Eslava en Nuevo Reino de Granada”; Francisco A. Eissa-Barroso y Ainara Vázquez Varela, eds., *Early Bourbon Spanish America: politics and society in a forgotten era (1700-1759)*, Early American History Series: the American Colonies, 1500-1830 1 (Leiden: Brill, 2013); Francisco A. Eissa-Barroso, *The Spanish Monarchy and the Creation of the Viceroyalty of New Granada (1717-1739): The Politics of Early Bourbon Reform in Spain and Spanish America* (Leiden, Boston: Brill, 2016). [↑](#footnote-ref-25)
26. Instrucciones dadas al virrey Sebastián de Eslava. AGI, Santa Fe, 572. [↑](#footnote-ref-26)
27. Kuethe y Andrien, *The Spanish Atlantic World in the Eighteenth Century*, 91. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Pragmatica sancion de S. M. en fuerza de ley, por la qual se prescribe el orden con que se ha de proceder contra los que causen bullicios ó commociones populares*. Madrid: Imprenta de Pedro Marin, 1774. [↑](#footnote-ref-28)
29. Que en todo caso son atribuciones particulares a sus jurisdicciones y no imitan las otorgadas a los virreyes europeos. Lalinde Abadía, Jesús, “El régimen virreinosenatorial en Indias”, *Anuario de Historia del Derecho Español*, Madrid, vol. XXXVII, 1967, p. 210-213. [↑](#footnote-ref-29)
30. Solórzano Pereyra, *Política indiana*, Lib. V, Cap. XIII. [↑](#footnote-ref-30)
31. El texto de dicha cédula tal como quedó impresa en la Recopilación era: "Concedemos Facultad á los Virreyes del Perú y Nueva España, para que puedan perdonar qualesquier delitos y excessos cometidos en las Provincias de su goviernos, que Nos, conforme á derecho y leyes destos Reynos podriamos perdonar, y dar, y librar los despachos necesarios, para que las Iusticias de todos nuestros Reynos y Señorios no procedan contra los culpados, á la averiguacion y castigo, assi de oficio, como á pedimennto de parte, en quanto á lo criminal, reservando su derecho en lo civil, daño, é interesses de las partes, para que le pidan y sigan como les convenga." *Recopilación de las leyes de los reinos de las indias*, Libro III, Título III, Ley XXVII. [↑](#footnote-ref-31)
32. Solórzano Pereyra, *Política indiana*, Lib. V, Cap. XIII. [↑](#footnote-ref-32)
33. AGNC, Sección Archivo Anexo, Fondo Reales Cédulas y Órdenes, Tomo 9, ff. 736v-737r. También en AGI, Santa Fe, 541, L. 1, 45r-47r. La misma facultad fue concedida a su predecesor Villalonga en 1717. Eissa-Barroso, *The Spanish Monarchy and the Creation of the Viceroyalty of New Granada*, 152. [↑](#footnote-ref-33)
34. AGNC, Sección Archivo Anexo, Fondo Reales Cédulas y Órdenes, Tomo 9, ff. 737r-737v. [↑](#footnote-ref-34)
35. AGNC, Sección Archivo Anexo, Fondo Reales Cédulas y Órdenes, Tomo 9, ff. 721r y 721v. Como señaló Solórzano, esta fue una fórmula general de las instrucciones dadas a los diferentes virreyes del Perú y Nueva España. Solórzano, *Política indiana*, Lib. V, Cap. XIII. [↑](#footnote-ref-35)
36. AGNC, Sección Archivo Anexo, Fondo Reales Cédulas y Órdenes, Tomo 9, f. 718r. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibid. [↑](#footnote-ref-37)
38. McFarlane, *Colombia before Independence*, 249–50. Margarita Restrepo Olano coincide con esta apreciación al estudiar la sublevación de los indios de Riohacha. *Nueva Granada en tiempos del virrey Solís*, 102–6. [↑](#footnote-ref-38)
39. Solórzano, *Política indiana*, Lib. V, Cap. XIII. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ibid., Lib. V, Cap. XII. [↑](#footnote-ref-40)
41. Carlos Garriga Acosta, “Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen”, *Istor. Revista de historia internacional* IV, núm. 16 (2004): 11–12. Para un ejemplo puntual la cita de Cicerón del *De Legibus* traducida por Bobadilla como “El Magistrado es ley que habla, y la ley es Magistrado mudo”. Castillo de Bobadilla, *Política para corregidores*, Lib. II, Cap. III:2. La cita original (Cicero, Leg. 3.2) ampliada es “Vt enim magistratibus leges, sic populo praesunt magistratus uereque dici potest, magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum.” En la cual se expresa además de lo traducido por Bobadilla la lógica del magistrado como legislador (*magistratibus leges*) quien dicta autoridad o poder (*dici potest*) como una expresión de su presidencia sobre el pueblo (*populo praesunt*), haciendo más explícito aún el hecho de que legislar es sinónimo de gobernar. El holandés Arnold Vinnen a comienzos del siglo XVI diría en su *Tractatus de jurisdictione et imperio* (publicado cerca de 1644 y reimpreso muchas veces hasta por lo menos bien entrado el siglo XVIII): “Jurisdictio est potestad juris dicundi in causa civili publice data aut permissa.” Que podría traducirse como “La jurisdicción es el poder de decir derecho en causa pública civil, dada o permitida. Arnold Vinnen, *Tractatus quatuor de pactis, jurisdictione, collationibus, et transactionibus.* (Amsterdam: expensis Stephani Abbatis, 1717), http://archive.org/details/bub\_gb\_r7EG4k7HfI4C. Cap. V, núm. 5. [↑](#footnote-ref-41)
42. Costa lo explica como una relación PS que representa una configuración asimétrica entre dos puntos abstractos P y S, en el cual P tiene poder sobre S pero no S sobre P, pero ese poder de P sobre S es el que permite la existencia de P y por ende legitima su autoridad sobre S. Pietro Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)* (Milano: Giuffrè Editore, 1969), 84. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ibid., 183. [↑](#footnote-ref-43)
44. Para ello, además de Pietro Costa, se encuentran los trabajos de Jesús Vallejo, *Ruda equidad, ley consumada: concepción de la potestad normativa, 1250-1350*, Historia de la sociedad política (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992); Nicola Picardi, *La giurisdizione all’alba del terzo millennio*, Dialettica, diritto e processo 3 (Milano: Giuffrè, 2007). [↑](#footnote-ref-44)
45. Pietro Costa, “La soberanía en la cultura político-jurídica medieval: imágenes y teorías”, *Res Publica* 17, núm. 0 (2007): 39 y 42, http://revistas.um.es/respublica/article/view/60591. [↑](#footnote-ref-45)
46. El rey, según Garriga, es el único distribuidor de jurisdicción al interior del espacio político. Carlos Garriga Acosta, “Continuidad y cambio del orden jurídico”, en *Historia y constitución: trayectos del constitucionalismo hispano*, ed. Carlos Garriga Acosta (México: CIDE, Instituto Mora, El Colegio de Michoacán, ELD, HICOES, El Colegio de México, 2010), 65. [↑](#footnote-ref-46)
47. Solórzano Pereyra, *Política indiana*, Lib. V, Cap. XIII. [↑](#footnote-ref-47)
48. Ibid., Lib. V, Cap. XII. [↑](#footnote-ref-48)
49. Al punto que el obedecimiento de los vasallos del rey debería ser absoluto aunque se equivocase “pues después serán castigados”, pero no por ello se podía incumplir el deber de obediencia al representante del monarca en cada provincia ya que “lo que hazen, lo debemos juzgar como hecho por el Rey”. Ibid., Lib. V, Cap. XIII. [↑](#footnote-ref-49)
50. Esto fue expresado claramente por Solórzano: “Pero aunque sea, i deba ser tal i tan grande como he dicho la autoridad i potestad de los Virreyes, i por respecto della se les concedan, i cometan las muchas cosas que se han referido, todavia deben siempre reconocer, que es sobre la suya la del Rey que los embió, i á quien representan, i que entonces la harán mayor, quando mas sugetos se mostraren á sus ordenes, i mandatos, i mas se ajustares al cumplimiento de sus leyes. Sabiendo, i reconociendo que por ningun modo estan libres, i sueltos dellas, i que en nada pueden, ni deben proceder de potestad absoluta, como algunos con imprudencia se lo presuade, sino con la regulada al derecho, i a los poderes generales, i ordenes, i instrucciones particulares, ó secretas, que se les huvieren dado.” Ibid. [↑](#footnote-ref-50)
51. Se puede visualizar esta idea significativamente en tratados como el *Código y práctica criminal* de Vicente Vizcaíno en el que dice “Solo pueden los Jueces lo que las Leyes mandan; y no pueden extender su autoridad y jurisdiccion á mas que lo que estas les prescriben, segun la regla de nuestro Derecho Español de las Partidas, que dice, solo podemos lo que con derecho podemos.”, sustentado en el hecho de que “las leyes se hicieron y hacen para que gobiernen, no para que sean gobernadas por los Magistrados á su arbitrio”. Vicente Vizcaíno Pérez, *Código y Práctica criminal: arreglado a las leyes de España*, vol. I (Madrid: en la Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1797), 14 y 16. [↑](#footnote-ref-51)
52. La frase completa es: “Llegó [Urdaneta] casi á un tiempo con Volívar á Tunja por Dic[iembr]e utimo y hacen á este General de las tropas de la Union, y lo mandan á Santa Fé, porque no habia querido federar. Lo mismo fue entrar en la Jurisdiccion [de Santa Fe], y desde Ventaquemada, que comenzaron á comer, robando qüanto encontraban” José González Llorente a Diego Frías. Kingston, 1 de abril de 1815. AGI, Santa Fe, 747, pza. 125. [↑](#footnote-ref-52)
53. Castillo de Bobadilla, *Política para corregidores*, Lib. II, Cap. III:7. [↑](#footnote-ref-53)
54. Por ello la idea de que entre más alejado el virrey del monarca mayor será su brillo. Solórzano, política indiana, Lib. V, Cap. XII. [↑](#footnote-ref-54)
55. Al parecer la facultad la siguieron usando sus sucesores don Joaquín de Aranda y Anceaga nombrado en julio de 1741 y don Basilio de Gante cuyo título se le otorgó en septiembre de 1742. Copias de títulos de Cartagena, AGI, Santa Fe, 998. [↑](#footnote-ref-55)
56. Concretamente, el Consejo de Indias le manifestó al rey: “El Consejo há acordado responder al Virrey disponga que el Gobernador de Cartagena, cese de indultar en estas causas y que le dé cuenta de ellas, para su decisión y considerando que por lo que pueda ocurrir será bien se conceda a uno ú otro gobernador dicha facultad, aunque con alguna limitacion y en la coyuntura presente de la Guerra, contempla siempre mas acertado que por el termino de dos años la reserve en si el Virrey enteramente.” Fernando VI sencillamente resolvió “No vengo en conceder, ni en que continuen estas facultades.” Extracto de resolución del Consejo de Indias de 28 de septiembre de 1748, AGI, Santa Fe, 546. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ejerció el cargo entre 1712 y 1718 después de haber sido gobernador de la Florida desde 1699. AGI, Indiferente general, 136, N.192 y AGI, Escribanía, 624A. [↑](#footnote-ref-57)
58. Synnøve Ones, “The Politics of Government in the Audiencia of New Granada, 1681-1719” (Tesis doctoral, Departamento de Historia, Universidad de Warwick, 2000), 188–92. [↑](#footnote-ref-58)
59. María Cristina Navarrete, *San Basilio de Palenque: Memoria y tradición* (Cali: Universidad del Valle, 2008), 159. La referencia a la rebelión de San Miguel la tomo de María Cristina Navarrete, “El tratado de paz que legitimó a San Miguel Arcángel por María Cristina Navarrete”, Blog, *Los Reinos de las Indias*, (el 29 de septiembre de 2016), https://losreinosdelasindias.hypotheses.org/1148. [↑](#footnote-ref-59)
60. Para que el Virrey de Nueva España y Gobernadores de aquel Reino, hagan publicar por bando lo resuelto por V. M. sobre que no se admitan a indulto las causas de ilícito comercio. AGI, Indiferente General, 538, ff. 262r-263r. [↑](#footnote-ref-60)
61. Don Melchor de Navarrete expone que el virrey Eslava le hizo retirar la facultad para indultar delincuentes de comercio ilícito. AGI, Santa Fe, 940. [↑](#footnote-ref-61)
62. Expediente de Melchor de Navarrete para que se le abone el sueldo por el tiempo que estuvo suspenso de su empleo. 3 de mayo de 1745. AGI, Santa Fe, 940. [↑](#footnote-ref-62)
63. Expediente para la restitución del empleo de teniente de la plaza de Cartagena a Melchor Navarrete. 28 de septiembre de 1743. AGI, Santa Fe, 940. [↑](#footnote-ref-63)
64. Juan Marchena Fernández, “Sin temor de rey ni de dios. Violencia, corrupción y crisis de autoridad en la Cartagena colonial”, en *Soldados del Rey. El ejército borbónico en América colonial en vísperas de la independencia*, ed. Allan J. Kuethe y Juan Marchena Fernández (Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 2015), 69. [↑](#footnote-ref-64)
65. AGNC, SC Colonia, Miscelánea, 59 D. 2. [↑](#footnote-ref-65)
66. Hoy un poblado indígena denominado Sukunya en el corregimiento Tubualá de la comarca Guna Yala, Panamá. Coordenadas geográficas long. 8.832726, lat. -77.633462. [↑](#footnote-ref-66)
67. Remisión al Virrey Pizarro sobre el indulto que concedió el Presidente de Panamá a Juan Silvan y otros 64 franceses. Panamá, 1751. AGI, Santa Fe, 546 [↑](#footnote-ref-67)
68. Ibid. [↑](#footnote-ref-68)
69. Fernando Muro Romero, “La configuración de provincias mayores en Indias como distritos administrativos puros. La Comandancia General de Panamá a fines del siglo XVIII”, *Anuario Jurídico* III–IV (1977): 153–55. [↑](#footnote-ref-69)
70. En un momento de la rebelión de 1766 se consulta con un oidor de la audiencia de Quito pero sólo porque éste se encontraba en la ciudad resolviendo otros asuntos cuando estalló la insurrección. [↑](#footnote-ref-70)
71. Consulta del virrey del Perú al Consejo de Indias. 21 de marzo de 1743. AGI, Quito, 105, ff. 29v-31r. [↑](#footnote-ref-71)
72. Carta del Virrey aprobando las providencias que acordó la Audiencia de Quito para la pacificación de la provincia. Santa Fe, 4 de agosto de 1765. AGI, Quito, 398. [↑](#footnote-ref-72)
73. Anthony McFarlane, “The ‘Rebellion of the Barrios’: Urban Insurrection in Bourbon Quito”, *The Hispanic American Historical Review* 69, núm. 2 (1989): 322, doi:10.2307/2515831. [↑](#footnote-ref-73)
74. “Título de gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela para don Julián de Arriaga”, AGI, Caracas, 418. Buen Retiro, 15 de septiembre de 1749. [↑](#footnote-ref-74)
75. Marchena Fernández, “Sin temor de rey ni de dios”, 55. [↑](#footnote-ref-75)
76. Las únicas excepciones fueron la sublevación de un grupo de 24 soldados del Regimiento de Milán en La Habana destinados a servir en Luisiana quienes se refugiaron en sagrado en 1768 y otro grupo de soldados en Campeche que se rebeló en 1787 y no juró bandera exigiendo el pago de lo atrasado. En ambos casos la debilidad del grupo de soldados fue lo que permitió que se aplicara el rigor de la justicia sin ningún inconveniente. Ibid., 48–51. [↑](#footnote-ref-76)
77. Ibid., 69–71. [↑](#footnote-ref-77)
78. Ibid., 72 y ss. [↑](#footnote-ref-78)
79. Jorge Juan y Antonio de Ulloa, *Noticias secretas de América (siglo XVIII)*, vol. I (Madrid: Editorial América, 1918), 154–55. [↑](#footnote-ref-79)
80. José de Carvajal, presidente entonces del Consejo de Indias, sospechaba que en el levantamiento habían sido cómplices “algunos oficiales y la gente del pais de todas las clases, opuesta siempre al establecimiento del Virreynato, que importa mantener”. Consulta al Consejo de Indias. Sin fecha. AGI, Santa Fe, 940. [↑](#footnote-ref-80)
81. Diario y verdadero relato de lo acaecido el día 2 de abril de 1745 en Cartagena de las Indias con la tropa de su guarnición. AGI, Santa Fe, 940. Transcripción de Juan Marchena, contrastada por mí con el manuscrito original. Marchena Fernández, “Sin temor de rey ni de dios”, 83–93. [↑](#footnote-ref-81)
82. Serrano Álvarez, *Fortificaciones y tropas*, 133. [↑](#footnote-ref-82)
83. Esta posibilidad de exponer a todo el reino es una apreciación que por una parte es exagerada pero es ante todo una justificación del por qué fue necesario ceder a todas las demandas de los sublevados. Marchena Fernández, “Sin temor de rey ni de dios”, 94. [↑](#footnote-ref-83)
84. 10.418317, -75.541025 [↑](#footnote-ref-84)
85. Plano de Cartagena, su puerto y península de Tierra Bomba hasta Boca Chica. Archivo General de Indias,MP-PANAMA,140 [↑](#footnote-ref-85)
86. Diario y verdadero relato… AGI, Santa Fe, 940. [↑](#footnote-ref-86)
87. Marchena Fernández, “Sin temor de rey ni de dios”, 96. [↑](#footnote-ref-87)
88. Diario y verdadero relato… AGI, Santa Fe, 940 [↑](#footnote-ref-88)
89. Ibíd. Subrayado en el original. Transcripción en Marchena Fernández, “Sin temor de rey ni de dios”, 91. Las frases entre corchetes simples son del documento original no transcritas por Marchena y el despliegue de las abreviaturas; las adiciones de Marchena las marco con corchetes dobles. [↑](#footnote-ref-89)
90. Tan sólo habría que mencionar los indultos de viernes santo que fueron comunes en la Europa católica hasta el siglo XVII. Rudy Chaulet, “La violence en Castille au XVIIe siècle à travers les Indultos de Viernes Santo (1623-1699)”, *Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies* 1, núm. 2 (1997): 5–27, doi:10.4000/chs.1007. [↑](#footnote-ref-90)
91. En la ceremonia del perdón de la “rebelión de los barrios” de Quito de 1765 se llevó a cabo una procesión en la cual no se extrajeron imágenes de los templos sino se pasearon las autoridades civiles, eclesiásticas y los capitanes de los barrios, ataviados con las mismas galas que lucían en las fiestas religiosas, lo cual indica una cierta tendencia a esta ritualidad asociada al perdón y las ceremonias religiosas que no parece pervivir más allá de esa década. Testimonio de los alcaldes ordinarios de Quito respecto a la reacción de los habitantes de la ciudad tras la recepción del indulto. Quito, 19 de septiembre de 1765. AGI, Quito, 398, f. 525r. [↑](#footnote-ref-91)
92. Los diputados de la iglesia de Cartagena dan cuenta del levantamiento de la plaza y las circunstancias para su apaciguamiento. Cartagena, 15 de mayo de 1745. AGI, Santa Fe, 940. [↑](#footnote-ref-92)
93. El rey a Eslava. Madrid, 25 de agosto de 1746. AGI, Santa Fe, 940. [↑](#footnote-ref-93)
94. El perdón fue certificado por Sebastián Carlos Pretel, abogado de la real audiencia y deán de la catedral de Cartagena de Indias y fue firmado por el virrey, el gobernador de Cartagena, los comandantes de los batallones de Aragón, España y de la tropa de marina, los inquisidores apostólico, el cabildo eclesiástico y de la ciudad y los prelados de las órdenes religiosas de la ciudad. Relación del levantamiento acaecido en Cartagena de las Indias. Cartagena, 7 de abril de 1745. AGI, Santa Fe, 940 [↑](#footnote-ref-94)
95. Ibid. [↑](#footnote-ref-95)
96. El rey a Eslava. Madrid, 25 de agosto de 1746. AGI, Santa Fe, 940. El pasaje específico se refiere al movimiento que hizo la tropa galo-hispana al mando del infante Felipe hacia la Torre del Puente para atacar las trincheras del rey de Cerdeña en octubre de 1744 durante la guerra de sucesión austriaca. María del Carmen Melendreras Gimeno, *Las campañas de Italia durante los años 1743-1748* (Murcia: Universidad de Murcia, 1988), 18 y ss.; Reed Browning, *The War of the Austrian Succession* (New York: St. Martin’s Press, 1995), 146–147. [↑](#footnote-ref-96)
97. Melendreras Gimeno, *Las campañas de Italia durante los años 1743-1748*, 89–90. [↑](#footnote-ref-97)
98. Consulta al Consejo de Indias. Sin fecha. AGI, Santa Fe, 940. [↑](#footnote-ref-98)
99. El rey a Eslava. Madrid, 25 de agosto de 1746. AGI, Santa Fe, 940. [↑](#footnote-ref-99)
100. Juan Marchena Fernández, *Ejército y milicias en el mundo colonial americano*, Colección Armas y América (Madrid: MAPFRE, 1992), 135. [↑](#footnote-ref-100)
101. John Huxtable Elliott, *Empires of the Atlantic World. Britain and Spain in America 1492-1830* (New Haven: Yale University Press, 2006), 320. [↑](#footnote-ref-101)
102. Marchena Fernández, “Sin temor de rey ni de dios”, 50. [↑](#footnote-ref-102)
103. Representación de la tropa levantada en Panamá. Panamá, 25 de septiembre de 1766. AGI, Panamá, 358. [↑](#footnote-ref-103)
104. Joseph Blasco de Orozco al Bailío Marqués de la Vega de Armijo. Panamá, 22 de septiembre de 1766. AGI, Panamá, 358. [↑](#footnote-ref-104)
105. José Blasco de Orozco a Julián de Arriaga. Panamá, 5 de octubre de 1766. AGI, Panamá, 358. [↑](#footnote-ref-105)
106. Ibid. En efecto la presencia del sargento Pabón fue fundamental para la comunicación y control de la plaza, en tanto el sargento mayor nombrado por el regimiento de la Reina como general fue suspendido y apresado tras unos rumores de su posible participación en llevar unas comunicaciones y dinero a la tropa de Portobelo para sofocar la sublevación. Diario y verdadero relato de lo acaecido el día 2 de abril de 1745 en Cartagena de las Indias con la tropa de su guarnición. AGI, Santa Fe, 940. Diario de lo acaecido con la tropa del regimiento de infantería de la Reina y del batallón de la plaza de Panamá. AGI, Panamá, 358. [↑](#footnote-ref-106)
107. Diario de lo acaecido con la tropa del regimiento de infantería… AGI, Panamá, 358 [↑](#footnote-ref-107)
108. Ibid. [↑](#footnote-ref-108)
109. El gobernador en el *diario* explicó que este castigo consistía en “darles palos tendidos voca avajo, castigo mui acostumbrado en la tropa Alemana y según sus oficiales me aseguraron introducido últimamente en la tropa de España y antiquado en su Regimiento” Ibid. Una sublevación en Panamá de 1776 demandó en los mismos términos que se eliminara el castigo de azotes, con lo cual se evidencia que este punto no se cumplió en este momento ni en años posteriores. Marchena Fernández, *Ejército y milicias en el mundo colonial americano*, 257. [↑](#footnote-ref-109)
110. María Inmaculada Rodríguez Flores, *El perdón real en Castilla (siglos XIII-XVIII)* (Salamanca: Universidad de Salamanca, 1971). [↑](#footnote-ref-110)
111. José Maldonado y Fernández del Torco, “Los recursos de fuerza en España: un intento para suprimirlos en el siglo XIX”, *Anuario de historia del derecho español*, 1954, 281–380. [↑](#footnote-ref-111)
112. Representación de la tropa levantada en Panamá. Panamá, 25 de septiembre de 1766. AGI, Panamá, 358. [↑](#footnote-ref-112)
113. Certificación de Luis José Mateo, escribano mayor de cabildo. Panamá, 25 de septiembre de 1766. AGI, Panamá, 358. [↑](#footnote-ref-113)
114. El virrey Pedro Mesía de la Cerda a José Blasco de Orozco. Santa Fe, 31 de octubre de 1766. AGI, Panamá, 358. [↑](#footnote-ref-114)
115. Marchena Fernández, “Sin temor de rey ni de dios”, 50. [↑](#footnote-ref-115)
116. Según la pesquisa de Marchena los soldados se refugiaron en sagrado al momento de la rebelión en las ciudades de Santo Domingo en 1741, Panamá en 1748 y 1751, Portobelo en 1762, La Habana en 1761, 1765 y 1768, y en Santiago de Cuba en 1765. Ibid., 48–50. La inmunidad que daba el refugio en sagrado y las reformas que intentaron limitar este fuero serán tratadas en el capítulo 2 de esta tesis. El tema también fue abordado para otros contextos americanos por Abelardo Levaggi, “Las instituciones de clemencia en el Derecho penal rioplatense”, *IV Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano*, 1976, 276–86 y Victor Manuel Uribe-Urán, “‘Iglesia me llamo’: Church Asylum and the Law in Spain and Colonial Spanish America”, *Comparative Studies in Society and History* 49, núm. 02 (2007): 446–472, doi:10.1017/S0010417507000552. [↑](#footnote-ref-116)
117. Manuel de Montiano al marqués de la Ensenada. Panamá, 17 de enero de 1751. AGI, Panamá, 356. [↑](#footnote-ref-117)
118. Sobre el perdón de los pecados y el sacrificio místico de Cristo es posible hallarlo en una importante cantidad de manuscritos litúrgicos, un ejemplo de esta idea está en Graciano, *De consecratione*, Dist. II, can. 71. “Et ideo quia cotidie labimur, cotidie Christus pro nobis mistice immolatur, et passio Christi in misterio traditur, ut qui semel moriendo mortem vicerat: cotidie recidiva delictorum per hec sacramenta corporis et sanguinis peccata relaxet.” Nótese el uso de *delictorum* como palabra para designar el pecado, mostrando la casi sinonimia entre pecado y delito tan común para el orden normativo medieval europeo y aún para buena parte de la edad moderna heredera del corpus castellano. Bartolomé Clavero, “Delito y pecado”, en *Sexo barroco y otras transgresiones premodernas*, de Francisco Tomás y Valiente et al., Alianza universidad 662 (Madrid: Alianza, 1990), 57–89. [↑](#footnote-ref-118)
119. Stanley J. Stein y Barbara H. Stein, *Silver, trade, and war: Spain and America in the making of early modern Europe* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2000), 202. [↑](#footnote-ref-119)
120. 10.113611°, -66.781389° [↑](#footnote-ref-120)
121. Robert J. Ferry, *The colonial elite of early Caracas: formation & crisis, 1567-1767* (Berkeley: University of California Press, 1989), 144; Kuethe y Andrien, *The Spanish Atlantic World in the Eighteenth Century*, 162–63. [↑](#footnote-ref-121)
122. “Many were isleños, other were free blacks, a few were runaway slaves, and yet other Indians” Ferry, *The colonial elite of early Caracas*, 145. [↑](#footnote-ref-122)
123. Ibid., 139–76; Kuethe y Andrien, *The Spanish Atlantic World in the Eighteenth Century*, 162–65. [↑](#footnote-ref-123)
124. Kuethe y Andrien, *The Spanish Atlantic World in the Eighteenth Century*, 163. [↑](#footnote-ref-124)
125. Ferry, *The colonial elite of early Caracas*, 146–52. [↑](#footnote-ref-125)
126. Luis Francisco Castellanos al marqués de la Ensenada. La Guaira, 20 de junio de 1749. AGI, Caracas, 418. [↑](#footnote-ref-126)
127. Ferry, *The colonial elite of early Caracas*, 153. [↑](#footnote-ref-127)
128. Dijo el oidor en su carta que “antes que pudiesse tomar cuerpo el desorden, formé sumaria, comminé á los ilseños, impedi con qualquier pretexto sus rondas al theniente governador pudiendose executar por oficiales de justicia con alguna gente de la compañia de los pardos; recogi y remití las cartas interceptadas al vuestro Governador, pero que no se havian avierto, y entendido de ello por mi carta, en respuesta de seis de Noviembre me dice quedar satizfecho con lo que assi calmaron los sustos del Pueblo y se evitó por esta via que andubiesse en quadrillas armados los isleños.” Informe de la comisión enviada por el capitán general de Santo Domingo para la pacificación de la provincia de Venezuela. Santo Domingo, 26 de enero de 1750. AGI, Caracas, 418. [↑](#footnote-ref-128)
129. Ferry, *The colonial elite of early Caracas*, 154. [↑](#footnote-ref-129)
130. Dictamente de José Cornejo enviado al Marqués de la Ensenada. Madrid, 19 de julio de 1750. AGI, Caracas, 418. [↑](#footnote-ref-130)
131. Representación de José Martínez de Porras. Caracas, 25 de septiembre de 1752. AGI, Caracas, 421. [↑](#footnote-ref-131)
132. Un ejemplo de esta ritualidad asociada a la misericordia real para el siglo XVI en Paulina López Pita, “Nobleza y perdón regio: Noticias sobre el otorgado a Pedro Girón en el contexto del movimiento comunero”, *Cuadernos de historia de España* 81 (2007): 75. [↑](#footnote-ref-132)
133. Cédula reservada para don Julián de Arriaga concediéndole la absoluta facultad de disponer a su arbitrio cuanto conduzca a la pacificación de la provincia de Venezuela. Buen Retiro, 15 de septiembre de 1749. AGI, Caracas, 418. [↑](#footnote-ref-133)
134. De la Corte a Arriaga. Se le dan plenas facultades para castigar o indultar. Que sea por los medios más suaves. Madrid, 15 de septiembre de 1749. AGI, Caracas, 418. [↑](#footnote-ref-134)
135. Bando de 1° de diciembre de 1749 a los habitantes de Caracas. AGI, Caracas, 418. [↑](#footnote-ref-135)
136. Auto enviado a notificar a Juan Francisco León. Caracas, 1 de enero de 1750. AGI, Caracas, 418. [↑](#footnote-ref-136)
137. Ferry, *The colonial elite of early Caracas*, 155. [↑](#footnote-ref-137)
138. Arriaga a la corte, sobre perdones concedidos. Caracas, 14 de enero de 1750. AGI, Caracas, 418. [↑](#footnote-ref-138)
139. Carta de Arriaga a Ensenada dando noticias del estado de pacificación de la provincia. Caracas, 14 de enero de 1750. AGI, Caracas, 418. [↑](#footnote-ref-139)
140. El Rey a Julián de Arriaga, sobre deserción en la provincia. Madrid, 18 de marzo de 1750. AGI, Caracas, 418. [↑](#footnote-ref-140)
141. Ferry, *The colonial elite of early Caracas*, 159–64. [↑](#footnote-ref-141)
142. Felipe Ricardos a Ensenada. Caracas, 11 de septiembre de 1751. AGI, Caracas, 421. [↑](#footnote-ref-142)
143. La rendición de León y los demás se da después de seis meses de encontrarse huyendo, perdiendo gradualmente el apoyo de sus aliados y cercado por la persecución de las autoridades reales del Nuevo Reino y de Venezuela. Ferry, *The colonial elite of early Caracas*, 167. La persecución en el Nuevo Reino puede evidenciarse por la carta del gobernador de Neiva que le comunica al gobernador Ricardos haber quedado notificado de la persecución al “perverso” León, familia y cómplices. Santiago de Mier Sousa y Arredondo a Ricardos. La Plata, 11 de febrero de 1731. AGNC, SC Colonia, F. Juicios Criminales, leg. 106, ff. 218-219. [↑](#footnote-ref-143)
144. Ricardos al rey. Caracas, 30 de abril de 1752. AGI, Caracas, 421 [↑](#footnote-ref-144)
145. El rey a Ricardos. Sin fecha. AGI, Caracas, 421. [↑](#footnote-ref-145)
146. Cazorla participó en las primeras acciones del levantamiento que fueron perdonadas por Julián de Arriaga. Felipe Ricardos a Ensenada, Caracas, 30 de abril de 1752. AGI, Caracas, 421. [↑](#footnote-ref-146)
147. Conmutación de las penas de los capturados con Juan Francisco León. Madrid, 17 de mayo de 1753. AGI, Caracas, 421. [↑](#footnote-ref-147)
148. Ferry, *The colonial elite of early Caracas*, 174–76. [↑](#footnote-ref-148)
149. Expediente sobre la petición de perdón de Nicolás de León. AGI, Caracas, 421. [↑](#footnote-ref-149)
150. Nicolás León solicita a SM que le libere del servicio de las armas. Orán, 4 de agosto de 1772. AGI, Caracas, 421. [↑](#footnote-ref-150)
151. Nicolás de León, hijo de Juan Francisco de León, impetra indulto. Orán, 28 de agosto de 1767. AGI, Caracas, 421. [↑](#footnote-ref-151)
152. El gobernador de Caracas comunica que se presentó Nicolás León con real indulto. Caracas, 16 de julio de 1773. AGI, Caracas, 82. Certificaciones anexas al expediente de Nicolás de León. Cartagena, 1 de enero de 1773. AGI, Caracas, 421. [↑](#footnote-ref-152)
153. "El exponente, señor! rinde á los reales pies de vuestra magestad sus cortos meritos con el mas humilde y fiel deseo de continuarlos en quanto sea en credito de su fidelidad, que anziosamente apeteze acreditarlo á beneficio de la Real Hazienda, pues concediéndole vuestra magestad la propiedad del expresado valle del Guapo y tierras que descubra, con el grado de capitán (sin sueldo alguno) ofrece subyugar á su costa todos los yndios bravos que le ocupan, y formar ally poblacion para vuestra magestad en donde dentro breve tiempo podrá rendir á vuestro real herario sumas de conciderazion por las crecidas arboledas de cacao y otros frutos que pueden en el criarse, y conquistados los yndios podrá asímismo apoderarse de diferentes minerales de plata y oro, que posehen oy ellos sin provecho alguno de vuestra magestad." Nicolás de León solicita que Su Majestad lo restituya a la honra que perdió. San Lorenzo, 15 de noviembre de 1773. AGI, Caracas, 421. [↑](#footnote-ref-153)
154. Rodríguez Flores, *El perdón real*, 31 y 15. [↑](#footnote-ref-154)
155. Laurentii Mattæu et Sanz, *Tractatus de re criminali* (Lyon: apud Anissonios, Posuel et Rigaud, 1686): 148. « Así pues, la indulgencia es la donación graciosa hecha por el Príncipe por la cual libremente perdona algunos crímenes del acusado y lo restituye a su estado original”. [↑](#footnote-ref-155)
156. Rodríguez Flores, *El perdón real*, 35. [↑](#footnote-ref-156)
157. Vincenzo Lavenia, “Restituire, condonare. Lessico giuridico, confessione e pratiche sociali nella prima età moderna”, en *Grazia e giustizia: figure della clemenza fra tardo Medioevo ed età contemporanea*, ed. Karl Härter y Cecilia Nubola (Bologna: Società editrice Il mulino, 2011), 389–411. [↑](#footnote-ref-157)
158. Decretales, 6, Libro I, Tit. XXI. [↑](#footnote-ref-158)
159. Adolf Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law* (Clark, NJ: The Lawbook Exchange, Ltd., 1953), n. Restitutio in integrum. [↑](#footnote-ref-159)
160. Rodríguez Flores, *El perdón real*, 215. [↑](#footnote-ref-160)
161. Paolo Prodi, *Settimo non rubare: furto e mercato nella storia dell’Occidente*, Collezione di testi e di studi (Bologna: Il mulino, 2009), 113–15. [↑](#footnote-ref-161)
162. Jean Delumeau, *L’aveu et le pardon: les difficultés de la confession, XIIIe-XVIIIe siècle*, Nouvelles études historiques (Paris: Fayard, 1990). [↑](#footnote-ref-162)
163. António Manuel Hespanha, “Da iustitia à disciplina, textos, poder e política penal no antigo regime”, *Anuario de historia del derecho español*, núm. 57 (1987): 522–23. [↑](#footnote-ref-163)
164. Garcia Mastrillo, *Ad indultum generale* (Palermo: Apud Franciscum Ciottum Venetum, 1616) Cap. I, No. 7, f. 6. “También se llama [a la indulgencia] restitución, la cual denota restauración completa […] esta definición afirma que es la reposición al estado original, otorgada por ninguna otra razón que la gracia y humanidad del Príncipe.” [↑](#footnote-ref-164)
165. Mastrillo, *Ad indultum*. “y de hecho se diferencia del resto de la justicia. Si se concede aquella [la restitutio] lo que se establece de este modo es el retiro del derecho, no quiere decir que sea por justa causa, prevista por la ley y obligada por el derecho, sino impulsada por la gracia, liberalidad y la humanidad del Príncipe”. Esta parte se encuentra también en el tratado del jurista perusino Sforza degli Oddi, *De Restitutione in Integrum* (Frankfurt: Apud Egenolphum Emmelium, 1627) Pars II, Quæstio XCII, que trata sobre la *restitutione in integrum gratiosa* titulada “Quæ ex mera Principis gratia bannitis, & rebellibus indulgeri solet”, artículo I, que recalca el mismo punto que estamos desarrollando aquí: “Est in pristinum statum repositio, nulla alia de causa concessa, quam ex mera principis gratia, & humanitate”. [↑](#footnote-ref-165)
166. “In integrum restitutio est prioris status, redintegratio, vel iuris prioris etiam est audientiæ redintegratio.” Antonio de Nebrija, Petri Gromorsi, Alexandri Scoti, et al., *Novum lexicon iuris utriusque* (Colonia: Johannes Gymnich, 1597), n. IN integrum restitutio. [↑](#footnote-ref-166)
167. AGI, Santa Fe, 732. Fray Tomás de Almanza pide se vuelva a abrir juicio. [↑](#footnote-ref-167)
168. Archivo General de la Nación de Colombia, Sección Colonia, Fondo Residencias, Serie Residencias Santander, tomo 37, ff. 641v-642r. [↑](#footnote-ref-168)
169. Como señala Vincenzo Lavenia, “Fama, in Spagna e non solo, significò siempre più spesso onore, l’onore de ceti privilegiati e del clero”. Lavenia, “Restituire, condonare”, 407. También Johannes Unterreitmeier, “Die Restitution von Schmach und Schmerzen Über die gemeinsamen historischen Wurzeln von Schmerzensgeld und Geldentschädigung”, *JuristenZeitung* 68, núm. 9 (2013): 430, doi:10.1628/002268813X13584133300487. [↑](#footnote-ref-169)
170. AGI, Audiencia de Santa Fe, 541, ff. 45r-47r. AGNC, SC Archivo Anexo, F Reales Cédulas y Órdenes, tomo 9, ff. 736r-738r. [↑](#footnote-ref-170)
171. AGNC, SC Colonia, F Residencias, S Residencias Santander, tomo 37, f. 642r. [↑](#footnote-ref-171)
172. Lavenia (“Restituire, condonare”, 392.) señala como punto de partida de la doctrina de la *remittetur* asociada a la *restitutio* se puede encontrar en la carta de San Agustín a Macedonio (*epistola 153*) “Si enim res aliena, propter quam peccatum est, cum reddi possit, non redditur, non agitur poenitentia, sed fingitur” (El pecado no es perdonado a menos que lo que se haya tomado sea restaurado. Porque, cuando no se restituye el bien ajeno por el que se pecó, pudiendo restituirse, la penitencia no es real, sino fingida). Pero, si el bien no se puede restituir de nada sirve la venganza y mucho la clemencia, porque en caso de duda sería preferible renunciar al dinero robado que atormentar o matar a alguien que no lo tiene: “Aliquando autem misericordes et in ipso dubio nolunt homini pro incerta pecunia certa inferre supplicia. Ad hanc misericordiam vos etiam nos provocare et exhortari decet: melius enim, etiamsi habet, amittis, quam si non habet, aut excrucias, aut occidis”. [↑](#footnote-ref-172)
173. Ibid., 408–9. [↑](#footnote-ref-173)
174. AGNC, SC Colonia, F Residencias, S Residencias Santander, tomo 36, ff. 882r-979v. Es muy poco lo que se sabe del gobernador Pedro Velázquez excepto que fue uno de los más ricos habitantes de la ciudad de Girón y gobernador de la provincia durante buena parte de la primera mitad del siglo XVIII. Yoer Javier Castaño Pareja, “La actividad esclavista en el oriente neogranadino: el caso de la provincia de San Juan Girón, 1700-1750”, en *Historia, cultura y sociedad colonial. Siglos XVI - XVIII. Temas, problemas y perspectivas*, ed. Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona (Medellín: La Carreta Editores, 2008), 238; Amado Antonio Guerrero Rincón, *Poder político local: Cabildo de Girón, siglo XVIII* (Bucaramanga: Centro de Estudios Regionales, SIC, Universidad Industrial de Santander, 2000). [↑](#footnote-ref-174)
175. AGNC, SC Colonia, F Residencias, S Residencias Santander, tomo 37, f. 680v. [↑](#footnote-ref-175)
176. No cuento con copia de la cédula que facultó al virrey Solís para perdonar delitos, pero de acuerdo con las dadas a Eslava (1739), Manuel Guirior (1771) y Caballero y Góngora (1783) todas siguen un patrón común que es como sigue: “Por Real Cedula de la fecha de esta, os he dado facultad para que si viereis que conviene para la quietud de aquellas Provincias perdonar a qualesquiera personas lo delitos que huvieren cometido, lo posais hacer, como mas por menos se expresa en dicha Real Cedula y respecto de que esta facultad se os da para lo que toca á la autoridad del cargo que os he conferiod, y por la confianza que tengo de vuestra persona, aunque entiendo que usareis de ella con la consideracion que se requiere, he resuleto advertiros que mi voluntad es que no useis esa facultad, sino fuese en casos de rebelion y que convenga mucho á mi servicio, y al sosiego y quietud de la tierra.” [Real Cédula declarando los casos en que podrá el virrey Manuel Guirior podrá usar la facultad de perdonar delitos. AGNC, SC Archivo Anexo, F Reales Cédulas y Órdenes, T. 19, s.f.] Ver así mismo la Recopilación de Leyes de Indias, Libro III, Título 3, Ley XXVII (Felipe III en 1614) “Concedemos Facultad á los Virreyes del Perú y Nueva España, para que puedan perdonar qualesquier delitos y excessos cometidos en las Provincias de su govierno, que Nos, conforme á derecho y leyes de estos Reynos podriamos perdonar, y dar, y librar los despachos necessarios, para que las Iusticias de todos nuestros Reynos y Señorios no procedan contra los culpados, á la averiguacion y castigo, assi de oficio, como á pedimento de parte, en quanto á lo criminal, reservando su derecho en lo civil, daños. é interesses de las partes, para que le pidan y sigan como les convenga”. [↑](#footnote-ref-176)
177. “se sirva V. E. estos, ó qualesquiera otros delitos, que pueda acusarseme perdonarlos, y darme Superior despacho, para que ni se me acusen, ni averiguen, ni se trate de ellos ni de sus penas, ni alguna de las Reales Audiencias, Gobernadores, Alcaldes, ú otros Juezes conoscan de ellos, aora pendan en autos obrados, ó para obrar, pues todo se han de romper y quitar, dandola por ningunos, y los delitos, qualesquiera que sean, por perdonados” [↑](#footnote-ref-177)
178. Este último argumento puede contrastarse con lo dicho por António Manuel Hespanha, “La economía de la gracia”, en *La gracia del derecho: economía de la cultura en la edad moderna*, trad. Ana Cañellas Haurie (Madrid: Centro de estudios constitucionales, 1993), 151–76. [↑](#footnote-ref-178)
179. AGNC, SC Colonia, F Residencias, S Residencias Santander, tomo 37, f. 681r-681v. [↑](#footnote-ref-179)